



Curso

"Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito Jurídico"



UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ÍNDICE

1. ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1.1. El origen de la violencia de género y su posible clasificación.

1.2. Algunos mitos asociados a la violencia de género dentro de la pareja y que son falsas explicaciones a la misma.

1.3. Consecuencias de la violencia de género dentro de la pareja.

1.3.1. Consecuencias para la salud de la mujer.

1.3.2. Consecuencias para la salud de los hijos e hijas.

1.3.3. Consecuencias para la salud del agresor.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1. Los PIOM y Planes de Acción contra la Violencia de Género.

2.1.1. Los distintos planes antes de la aprobación de la LOMPIVG.

2.1.2. Planes e instrumentos de planificación tras la aprobación de la LOMPIVG.

2.2. Instituciones en la lucha contra la violencia de género.

2.2.1. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

2.2.2. Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer.

2.2.3. El Ministerio Fiscal y la violencia de género.

2.2.4. Unidades de violencia contra la mujer.

3. LAS PRIMERAS REGULACIONES CONTRA LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO PENAL. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

4. LA REGULACIÓN DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN RELACIONADA CON EL CONCEPTO DE "VIOLENCIA DOMÉSTICA"

4.1. Objetivos, principios de la orden de protección, lugar de presentación y requisitos para su adopción.

4.2. Contenido de la orden de protección, órgano judicial competente y plazo de vigencia de la orden.

4.3. La orden de protección europea.

5. EL NUEVO CONCEPTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (LO 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE)

5.1. Artículo 1 de la LOMPIVG.

5.2. Principios de la LOMPIVG.

5.3. Medidas que contempla la LOMPIVG.

5.3.1. En el sistema educativo.

5.3.2. En el ámbito de medios de comunicación y publicidad.

5.3.3. En el ámbito sanitario.

5.4. Derechos de las víctimas según la LOMPIVG.

5.4.1. Derecho a la información.

5.4.2. Derecho a la asistencia social integral.

5.4.3. Asistencia jurídica.

5.4.4. Derecho al cambio de apellido.

5.4.5. Derechos laborales y para funcionarias públicas.

5.4.6. Prestaciones de Seguridad Social.

5.4.7. Derechos económicos.

5.4.8. Derechos de protección en el proceso judicial.

6. REFORMAS OPERADAS EN EL CÓDIGO PENAL POR LA LOMPIVG

6.1. Ámbito de los delitos afectados por la reforma.

6.2. Tipos penales y penas aplicables.

6.2.1. Lesiones agravadas (art. 36 de la LOMPIVG).

- 6.2.2. Maltrato familiar (art. 37 de la LOMPIVG).
- 6.2.3. Amenazas (art. 38 de la LOMPIVG).
- 6.2.4. Coacciones leves (art. 39 de la LOMPIVG).
- 6.2.5. Penalidad común a los anteriores tipos delictivos.
- 6.2.6. Quebrantamiento de condena (art. 40 de la LOMPIVG).
- 6.2.7. Faltas en materia de violencia de género (art. 41 de la LOMPIVG).
- 6.2.8. Delito de maltrato habitual.

6.3. Suspensión y sustitución de las penas.

6.4. Administración penitenciaria.

6.5. Sentencias del Tribunal Constitucional dictadas con relación a la reforma penal operada por la Ley Integral.

7. REFORMAS EN EL ORDEN PROCESAL: LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER: NATURALEZA, ÁMBITO, COMPETENCIAS PENALES Y CIVILES, EQUIPOS PSICOSOCIALES

7.1. Creación de los juzgados de violencia sobre la mujer y competencia

- 7.1.1. Competencias en el orden penal.
- 7.1.2. Competencias en el orden civil.
- 7.1.3. Recursos.
- 7.1.4. Citaciones y notificación de sentencias.
- 7.1.5. Pérdida de competencia objetiva de los Tribunales Civiles cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer.
- 7.1.6. Competencia territorial.
- 7.1.7. Competencia por conexión.
- 7.1.8. Equipos técnicos o psicosociales.
- 7.1.9. Tasas judiciales para víctimas de violencia de género

8. INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

8.1. Cuerpos específicos y regulación de su intervención.

9. RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

9.1. Recursos de información y control telemático.

- 9.1.1. Servicio estatal de información de recursos a través de Internet.
- 9.1.2. Teléfono 016.
- 9.1.3. Servicios de teleasistencia.

9.2. Recursos de vivienda.

- 9.2.1. Recursos de alojamiento temporal.
- 9.2.2. Acceso prioritario a viviendas.

9.3. Recursos en materia de empleo.

- 9.3.1. Renta Activa de Inserción o RAI.
- 9.3.2. Programa para la inserción laboral de víctimas de violencia de género.

9.4. Prestaciones económicas.

- 9.4.1. Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
- 9.4.2. Ayuda del artículo 27 de la LOMPIVG.

9.5. Otros recursos.

9.6. Recursos de organismos de igualdad y autonómicos.

10. DIFICULTADES PROCESALES RELACIONADAS CON LA VÍCTIMA Y CON LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

10.1. Retirada de la orden de protección.

10.2. Negativa de la víctima a declarar.

10.3. Incumplimiento de la orden de alejamiento.

11. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Para reflexionar ...

"La violencia del sexismo se debe comprender con relación a esa forma de muerte psíquica en la construcción del deseo de vivir y ser".

(Marta Lamas, antropóloga feminista mexicana).

También podemos ilustrar el tema con esta viñeta gráfica de Ricardo y Nacho (humoristas gráficos en el periódico el Mundo):



1. ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Para poner en práctica...



¿Crees que la violencia que muchas mujeres sufren dentro de su relación de pareja tiene algo que ver con los estereotipos y roles de género? ¿Y con las ideas que hay en nuestra sociedad sobre el amor romántico?



¿Qué formas de violencia de género conoces?



¿Por qué cuesta tanto tomar conciencia y romper una relación en la que existe violencia de género?



¿Conoces las consecuencias de esa violencia sobre la salud?

1.1. EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU POSIBLE CLASIFICACIÓN

Como ya se ha expuesto en la Unidad 5, la legislación penal durante años ha tratado de manera desigual a la mujer y al hombre. Y la respuesta legal ante la violencia contra la mujer a manos de su cónyuge o pareja masculina ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Así, no debemos olvidar que en el Código Civil y hasta la reforma efectuada por la *Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges*, la esposa estaba legalmente sometida al "ius corrigendi" del cónyuge. Y por ello sólo se enjuiciaban los casos en los que había un exceso (muerte o lesiones).

La violencia de género contra las mujeres es aquella violencia machista

ejercida contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Pero no por el hecho de ser mujeres desde una concepción biológica, sino de los papeles y la posición que se asigna a las mujeres desde una concepción social. E implica una desigualdad imposible de justificar si no es desde las posturas más machistas de la sociedad. Por tanto, parte de la desigualdad estructural entre hombre y mujer y se apoya en prerrogativas culturales, conceptos tradicionales, estereotipos y roles que en el orden social se han establecido para uno u otro sexo. Ese predominio androcéntrico ha dado lugar a muchas discriminaciones hacia las mujeres y probablemente las más grave de sus expresiones en la violencia contra las mujeres. La violencia de género es la forma que tiene el sistema patriarcal de dominar y controlar que el orden que ha establecido se mantenga.

Para que esta violencia se mantenga, se establecen una serie de mecanismos que invisibilizan que la violencia se da en todas las esferas de nuestras vidas y que aparece en todas nuestras relaciones, aunque en distinto grado.

Ya en la Unidad 1, al explicar el concepto de violencia de género, se aludió a la definición recogida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, en la *Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer*, en la que se afirma que *"la violencia de género deteriora o anula el desarrollo de las libertades y pone en peligro los Derechos Humanos fundamentales de las mujeres, la libertad individual y la integridad física de las mujeres"*.

Y especifica, entre otras cuestiones, que la violencia contra las mujeres es *"todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluida las amenazas, la coacción o la aprobación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada"*.

Los tipos de violencia de género contra las mujeres se pueden clasificar de muchas maneras:

A) Según el ámbito donde se produce:

- **Violencia en el ámbito de la pareja (y expareja).** Violencia física, psicológica, sexual o económica (control del dinero o impedimento del acceso a él, prohibición de realizar un trabajo remunerado, etc.) ejercida sobre las mujeres y realizada por parte del hombre que es o ha sido su cónyuge o persona ligada por relaciones similares de afectividad.
- **Violencia en el ámbito familiar.** Violencia física, sexual, psicológica o económica, ejercida sobre las mujeres tanto mayores como menores de edad, que se da en el seno de la familia, perpetrada por parte de miembros de la misma familia y determinada por el marco de las relaciones afectivas y los vínculos del entorno familiar.
- **Violencia en el ámbito laboral.** Violencia física, sexual o psicológica, que se puede producir tanto en el centro de trabajo y durante la jornada de trabajo, como fuera del centro y de las horas de trabajo, siempre que tengan relación con el trabajo.
- **Violencia en el ámbito social o comunitario.** Comprende las agresiones sexuales, el acoso sexual, la trata y explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina o el riesgo de sufrirla, los matrimonios forzados, aquella derivada de los conflictos armados. Como dos subtipos, podría hablarse de:
 - **Violencia contra los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.** Comprende abusos y agresiones sexuales, pero también los abortos selectivos, el aborto penalizado, las esterilizaciones forzadas, matrimonios forzados, abusos sexuales, coacción y coerción para mantener algún tipo de relación sexual, o para no utilizar métodos de planificación familiar, la imposición de relaciones con terceras personas; la homofobia, lesbofobia y transfobia.

- **Violencia derivada de los conflictos armados.** Incluye todas las formas de violencia contra las mujeres que se producen en contexto de guerra, como el asesinato, la violación, la esclavitud sexual, el embarazo, el aborto y la esterilización forzados; la infección intencionada de enfermedades, la tortura o los abusos sexuales. A todo ello se ha aludido en la Unidad 5.

B) Otra clasificación está determinada por las diferentes manifestaciones de la violencia de género o machista en la pareja:

- **Violencia económica.** La privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y la limitación en la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.
- **Violencia física.** Cualquier acto contra el cuerpo de una mujer con el resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un daño.
- **Violencia psicológica.** Toda conducta u omisión intencional que produzca en una mujer una desvalorización o un padecimiento, por medio de: amenazas, humillaciones, vejaciones, exigencias de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento o cualquier otra limitación de su ámbito de libertad.
- **Violencia sexual y abusos sexuales.** Cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la observación y la imposición, por medio de violencia, de intimidación, de prevalencia o de manipulación emocional, de relaciones sexuales. Con independencia de que la persona agresora pueda tener con la mujer o la menor, una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.



Para consultar

Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, presentado en octubre de 2006. Realizado por mandato de la Asamblea general de naciones Unidas.

Fuente: [Asamblea General de Naciones Unidas](#)

Además, el 23 de marzo de 2007, la que entonces era la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Yakin Erturk declaró, con relación a ese estudio: *"El estudio destacó el esfuerzo laborioso que a través del tiempo y muy distintas épocas, se ha logrado para la elaboración de un marco internacional sobre la violencia contra la mujer en relación con la cultura". Sin embargo, sostuvo que pese a que estas normas "establecen el derecho de la mujer a vivir sin someterse a la violencia de género, los Estados no pueden invocar ningún discurso cultural para justificar o condonar cualquier acto de violencia". En este sentido, explicó que el problema comparte consideraciones históricas presentes en todas las culturas y civilizaciones". Y añadió: "Aunque en muchas partes del mundo se ha registrado una desviación significativa de la norma universal de inequidad de género, no hay un solo país o sociedad que haya establecido plenamente la igualdad entre hombres y mujeres. En consecuencia, la violencia contra las mujeres, enraizada en la desigualdad de género, continúa siendo un fenómeno universal".*

Fuente: [Unifem](#)



Para consultar

El Estudio multipaís sobre la salud de la mujer y violencia doméstica, primer estudio sobre la violencia doméstica realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2005, pone de manifiesto que la ejercida por la pareja es la forma de violencia más común en la vida de las mujeres, mucho más que las agresiones o violaciones perpetradas por extraños o simples conocidos. En el estudio se describen las gravísimas consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres que tiene en todo el mundo la violencia física y sexual ejercida por el cónyuge o la pareja, y se expone el grado de ocultación que sigue rodeando este tipo de violencia.

El estudio se basa en entrevistas con más de 24 000 mujeres de zonas rurales y urbanas de 10 países: Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania. El estudio revela que entre una cuarta parte y la mitad de las mujeres físicamente agredidas por su pareja afirmaron haber sufrido lesiones físicas a consecuencia directa de ello. Además, la probabilidad de que una mujer padeciera mala salud o problemas físicos o mentales era dos veces superior en las mujeres maltratadas, aun cuando los episodios de violencia se remontaran a varios años atrás.

Puede leerse un resumen en: [Organización Mundial de la Salud](#)



Para consultar

[Informe del Secretario General de Naciones Unidas](#), 2 de agosto de 2010, sobre **Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer.**

[Resolución aprobada por la Asamblea General](#) [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/64/433)] 64/137. **Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, 18 de diciembre de 2009:**

Handbook for legislation on violence against women, 2010

Fuente: [Naciones Unidas](#)

Centro Virtual de Conocimientos para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas), que funciona como un recurso integral para diseñar e implementar programas contra la violencia.

Fuente: [ONU Mujeres](#)

En cuanto a la especificidad de la violencia de género en la pareja, existen diversas teorías desde diferentes ámbitos para explicar la violencia de género:

A) Teorías desde el ámbito sociológico: algunas personas creen que se deben a la crisis que hoy en día padece la institución familiar. Dentro de éstas, destacan las:

- **Teoría del aprendizaje social:** sostiene que puede aprenderse a comportarse como víctima de violencia o como agresor a través de una historia familiar de violencia familiar.
- **Teoría familiar sistémica o teoría general de los sistemas:** según esta teoría, la familia es parte de una sociedad en la que existe violencia, algo que parece atribuir similar responsabilidad a

todos sus miembros, razón por la que esta teoría provoca críticas.

- **Teoría de los recursos:** conforme a ella, la familia, como otros sistemas sociales, puede utilizar la fuerza o la amenaza para ejercer poder, razón por la que esta teoría provoca críticas, al dar una explicación puramente individual al maltrato de género.
- **Teoría del intercambio:** un miembro de la familia será violento si el costo de ser violento no sobrepasa los beneficios que se consiguen con la violencia, como el control en la relación.
- **Teoría del estrés:** conforme a la cual, la violencia familiar surge cuando una persona se encuentra bajo estrés y carece de recursos personales y de estrategias de enfrentamiento para mitigar su impacto.
- **Teoría feminista:** se considera que la violencia dentro de la pareja es el reflejo de la relación desigual de poder en las relaciones entre las mujeres y los hombres y que su raíz se halla en la dimensión de dominio y poder masculino de nuestra sociedad. Por ello, consideran indispensable tener en cuenta el género. Desde esta teoría, la violencia masculina se encuentra en la estructura social y no en la psicopatología individual de los agresores.

B) Teorías desde el ámbito psicológico:

- **Teoría de indefensión aprendida:** que explica que, tras episodios de violencia reiterados, la mujer interioriza la inutilidad de sus estrategias para evitarlos y queda sometida y anulada, sin ver salida. **Leonore Walker, basándose en ello**, desarrolló la teoría del ciclo de la violencia conyugal, que se expondrá más adelante.
- **Teoría de la unión traumática:** busca explicaciones asociadas a la búsqueda de una relación emocional fuerte, como se da también en los rehenes, líderes religiosos y menores maltratados, donde uno/a maltrata y el otro/a siente emociones positivas hacia el que maltrata, estableciéndose una relación de poder y dependencia.
- **Teoría del acoso moral,** de Mari France Hirigoyen, según la cual el

maltratador o "perverso" seduce y paraliza a la víctima desde el engaño. Se empieza con abuso de poder y luego, con la pérdida de la autoestima del otro/a y su destrucción moral.

La explicación más aceptada en el ámbito doctrinal feminista y en la legislación internacional es que la violencia de género en la pareja se produce porque las estructuras sociales socializan a agresores y víctimas a través de los papeles tradicionales de masculinidad y feminidad (roles de género). Dicha violencia nunca es casual, pues siempre responde al objetivo de ejercer dominación y control. Las mujeres no inician una relación con un hombre violento reconociéndolo como tal. Suele requerirse tiempo y dolor para identificar que se está dentro de una relación abusiva. A menudo, los papeles aprendidos, los estereotipos y el amor romántico se ponen en juego y se inicia una relación basada en valores tradicionales donde a las mujeres se les asigna el cuidado y a los hombres la protección. Aparecen los celos y el amor fusional, la dependencia emocional, las concesiones, y finalmente, la culpa. Ello va creando un círculo de violencia.

Según han estudiado numerosas autoras, como Charo Altable o Marcela Lagarde, el amor romántico no es un amor que nos haga crecer como personas ni establezca una pareja respetuosa. Es aquella manera de entender las relaciones desde la fusión y desde dejar de ser una misma para convertirse en la mitad de otro. Un "Otro" irreal, sometido a los mandatos más tradicionalmente patriarcales de sumisión y de identidades ficticias. El amor romántico, se traduce en aquel príncipe azul prometido en los cuentos de hadas. Las mujeres hemos sido configuradas socialmente para el amor, hemos sido construidas por una cultura que coloca el amor en el centro de nuestra identidad. Y, desde esa visión, los celos, los sentimientos de posesión, ansias de control y el paternalismo se nos transmiten como el "reflejo del amor". Nada más lejos de la realidad. El amor romántico, aquél por lo que la enamorada haría (*y tiene que hacer*) cualquier cosa para que su enamorado, que no conoce límites (*tiene que tener*), que no entiende de espacios propios (*todo se tiene que hacer con él y pensando en él*), que no contempla las

necesidades que podrían hacer decir "no" en el otro (*si amas, lo importante es, siempre, éste otro*), que supone amarlo a él más que a una misma (*eso sería muy egoísta*), y que no entiende la propia satisfacción y felicidad si no es mediante la del otro (*de nuevo el egoísmo y el no entregarse ni amar del todo*). Si se actúa según estos postulados de este amor romántico, pasional e intenso, es fácil perderse de una misma, pues estamos esperando sólo la aprobación del otro, su felicidad, el ser merecedora de su amor (y constantemente deseada).



Para consultar

En este sentido, **Marcela Lagarde** nos plantea que pocas veces aprendemos de las historias de amor de personas de carne y hueso que funcionan bien, y que suelen tener poco de los mitos. Marcela Lagarde dice que "mantenemos el amor en formas tan tradicionales que darían gusto para un museo. Somos modernas en apariencia. En la carrocería, en el estilo, en las formalidades. Pero la propia subjetividad, lo que está más ligado a los afectos configuradores de nuestra identidad de género, el amor, permanece intocado. Nuestro sincretismo es a veces tan lastimoso porque el amor, tan central en la vida de las mujeres, resulta el espacio más tradicional en las mujeres modernas.

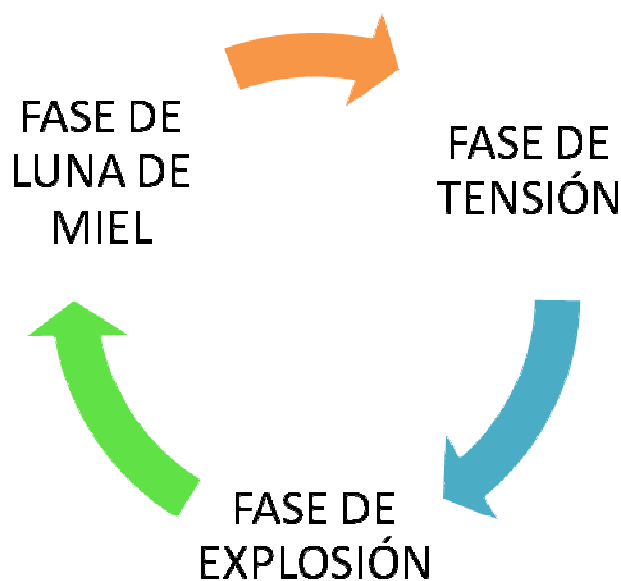
Charo Altable, en su libro "Penélope o las trampas del amor", nos plantea lo que en su opinión no debe confundirse con amor. Son cuestiones sencillas pero que nos pueden hacer pensar:

- El amor no es compasión. La compasión es un sentimiento de tipo paternalista; quien compadece se siente superior al sujeto compadecido. Está basado en la desigualdad. Cuando compadecemos miramos al otro/a como objeto, de una desgracia, no como sujeto.
- El amor no es un sino. El amor no es un destino, es una elección. Considerar el amor como un destino o azar supone evitar la responsabilidad y no nos empuja a cambiar.
- El amor no es el encuentro con la "media naranja". Relacionado con lo anterior, el amor es más "un camino que se hace al andar", encontrando y compartiendo con las personas compañeras del camino.

- El amor no es sinónimo de matrimonio. Ni de convivencia, ni de pareja. En realidad, el matrimonio responde a necesidades de seguridad jurídica en torno a la descendencia y los bienes.
- Amor no es dolor. El dolor y el sufrimiento van unidos al concepto de amor cristiano, que redime culpas; o al amor cortés, que siempre es un amor irrealizable; o a la ausencia o ansia de amor; es decir, al amor-mito.
- Amor no es posesión, ni control del otro, sino intercambio. Pero para ello el amor debe darse entre iguales, si no el amor se convierte en relación de dominación. Y el poder, el control, la dependencia destruyen...
- Amor no es fantasía de amor. Aunque el amor está lleno de fantasía, no debe confundirse con la fantasía de amor, en la que todo es perfecto y hecho a la medida de nuestro deseo. El amor exige fuerza de voluntad...

Así el amor romántico es terreno propicio para que las relaciones desiguales aparezcan y se consoliden como relaciones abusivas.

Como describió Leonor Walker, para que se mantenga la violencia, para que ésta se quede en lo invisible y para que sea tan extremadamente difícil identificar la situación de violencia que se vive, es necesario un patrón que la sostenga e invisibilice, que casi le dé sentido. Por supuesto, partiendo de que la estructura abusiva ya existe en esa pareja, podemos describir tres grandes momentos en este ciclo de la violencia:



- La fase de tensión, donde hay fricciones y conflictos, donde el hombre expresa amenaza, menosprecio, hostilidad entre otras. Y donde las mujeres bajo la creencia de amor romántico creen que pueden "calmar la situación" y se sitúan en un lugar de constante sumisión y complacencia.
- Fase de agresión o explosión aguda: donde se producen estallidos de violencia física, sexual o psicológica. Donde la agresión es vivida como violencia por parte de la mujer. Aunque por los mecanismos de la propia violencia, se justifique.
- Fase de conciliación o "luna de miel": donde el hombre violento aparentemente se arrepiente, pide perdón, hace regalos, promete que va a cambiar, etc. Las mujeres víctimas creen el artificio emocional de que "él puede cambiar" o "me quiere".

Evidentemente cuanto más tiempo en situación de maltrato está la mujer, las agresiones son más frecuentes y con mayor intensidad y se pasa más rápido de una fase a otra. Es importante identificar que la violencia de género contra las mujeres ejercida por la pareja o expareja, no es un hecho puntual. Es producto de un proceso sistemático y continuo de deterioro, por parte del agresor, de la autonomía, la libertad y la autoestima de las mujeres. Este hecho no se produce de un día para otro, muy al contrario, es un hecho que su principal característica es que es de "escalada".

1.2. ALGUNOS MITOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DE LA PAREJA Y QUE SON FALSAS EXPLICACIONES A LA MISMA

Existen algunos mitos asociados a la violencia de género, que son falsos y distorsionan la imagen de la violencia contra las mujeres:

- **"La mujer busca o merece el maltrato".** Nada justifica la

violencia. Ninguna persona tiene derecho de hacer uso de la violencia hacia otra.

- **"La mujer golpeada no cambia su situación porque le gusta. Las mujeres agredidas son masoquistas".** A muchas mujeres se les dificulta poner límites y pedir ayuda para detener la situación de violencia contra ellas porque: han aprendido que el amor está asociado con la espera y el sacrificio, se les ha educado para creer que si no están con alguien no son nada, viven en dependencia económica, experimentan miedo a romper la "unión" familiar, viven con un gran miedo a las represalias, no visualizan redes de apoyo.
- **"Si aguanta, él cambiará".** La violencia es reiterativa y va en aumento. Si no se detiene, pasa del grito a los golpes y puede llegar hasta la muerte.
- **"Si él trabaja, trae lo que necesita a la casa y trata bien a los hijos y a las hijas, no se puede pedir más".** Nada justifica hacer uso de la violencia. Toda persona merece ser tratada con respeto, justicia y amor.
- **"El que abusa de una mujer tienen problemas mentales, es un loco".** Varios estudios muestran que menos de un 10% de los casos de violencia son ocasionados por trastornos mentales del agresor.
- **"La mayoría de los maltratadores son alcohólicos o drogadictos".** Tomar alcohol o drogas, puede facilitar y servir de pretexto para hacer uso de las conductas violentas, pero no es la causa. Muchos alcohólicos o drogadictos, no agreden a sus compañeras y muchos de los que agreden no consumen alcohol ni toman drogas. Además ¿Por qué los que consumen alcohol o drogas

no son igual de violentos con los hombres que les rodean?

- **"Las mujeres de "clase baja" tienen un índice mayor de maltrato que las de clase media o alta".** La agresión afecta a todas las mujeres, sin importar la clase social, sea baja, media o alta.
- **"Las mujeres agredidas carecen de educación".** Las estadísticas demuestran que la agresión no impone límites ni barreras, se presenta en todos los niveles académicos, sean abogadas, doctoras, amas de casa, ingenieras y otras
- **"Los agresores son hombres fracasados y carecen de recursos para enfrentar al mundo".** Al igual que las mujeres maltratadas, el agresor pertenece a cualquier esfera social, en cualquier nivel educativo y puede además desempeñar cualquier profesión u oficio.
- **"El agresor no es un compañero cariñoso".** Los agresores pueden ser hombres cariñosos en sus manifestaciones, no precisa tener una conducta hostil. De hecho, el ciclo de la violencia tiene una etapa denominada "luna de miel" donde se muestran muy cariñosos.
- **"La violencia verbal no es tan mala como la física".** Todos los tipos de violencia son dañinos. Recordemos que las secuelas psicológicas generalmente son peores que las físicas.
- **"Algún conato de violencia es natural en la pareja".** No es natural que exista agresión en la relación de pareja. El amor, el respeto mutuo y la equidad sí son actitudes que corresponden a una relación de pareja.

No existe un perfil de mujer maltratada, ni de agresor, según el

consenso científico actual. Así, cualquier mujer puede ser víctima, sea cual sea su edad, raza, nacionalidad, formación, clase social, etc, y cualquier hombre puede ser violento. A partir de esto, pueden existir factores de mayor vulnerabilidad en las víctimas, que dificulten la toma de conciencia de la violencia sufrida y la posibilidad de romper con ella, como tener una historia de violencia familiar en su infancia, estar embarazada, depender económicamente del agresor, tener baja autoestima y aislamiento social. Además, pueden existir factores asociados al agresor que suponen un mayor riesgo de que ejerza maltrato en sus relaciones, como una concepción rígida del rol de géneros, e identificación de la masculinidad con la violencia.

Por otra parte, con relación a la violencia sexual, a menudo en el imaginario colectivo va asociada exclusivamente a las violaciones. Sin embargo, va más allá de eso. La violencia sexual es aquella violencia ejercida en la esfera de los cuerpos sexuados de las mujeres. El objetivo de ésta es desprender a las mujeres de su dignidad, de su autonomía y, también, del ejercicio del placer y del deseo. Existen mandatos tradicionales sexistas que someten los cuerpos de las mujeres a *"cumplir"*: *"obligan silenciosamente a mujeres"* a estar disponibles, a *"dejar de ser frías"*, a ser lo que la pornografía nos representa, o lo que el silencio del *"todo por amor"* significa en muchas ocasiones.

1.3. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO DE LA PAREJA

Existen numerosas consecuencias de la violencia de género, para las distintas personas intervinientes y afectadas:

1.3.1. CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LA MUJER

Se han estudiado numerosas consecuencias tanto en el ámbito físico como psicológico:

A) CONSECUENCIAS FÍSICAS:

- Cualquier lesión traumática, sobre todo de localización central: cara, cuello, tórax, abdomen, genitales (en zonas no visibles y pueden presentar diferentes datos.).
- Trastornos gastrointestinales.
- Síndromes de dolor crónico, mialgias, poliartralgias, etc.
- Fibromialgia.
- Síndrome de intestino irritable.
- Derrame ocular.
- Hipoacusia por rotura timpánica.
- Dolor torácico, palpitaciones, disnea.
- Consecuencias para la salud reproductiva y sexual: Menstruaciones irregulares o dolorosas, síndrome premenstrual; infertilidad; enfermedad inflamatoria pélvica y/o dolor pélvico crónico; enfermedades de transmisión sexual (incluido el SIDA por abuso sexual o impedimento para el uso de preservativos); embarazo no deseado; complicaciones del embarazo y/o aborto; disfunción sexual: dispareunia, vaginismo.

B) CONSECUENCIAS PSÍQUICAS Y CONDUCTAS DE RIESGO:

- Baja autoestima.
- Depresión y ansiedad.
- Trastornos alimentarios.
- Fobias y trastornos de pánico.
- Síndrome de estrés postraumático.
- Enfermedades psicosomáticas.
- Suicidio y/o autolesiones.
- Abuso de psicofármacos, alcohol y/o drogas.
- Tabaquismo.
- Mortalidad: homicidio.

C) CONSECUENCIAS LABORALES Y SANITARIAS:

- Mayor número de bajas por enfermedad.
- Mayor número de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas.
- Hiperfrecuentación a la consulta de su médico.
- Mayor uso de los dispositivos de salud mental.
- Mayor consumo de medicamentos.

1.3.2. CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LOS HIJOS E HIJAS

Se han estudiado numerosos efectos:

- Sentimientos de miedo y amenaza, pesadillas, ansiedad, depresión.
- Dificultades de aprendizaje y socialización.
- Comportamientos auto o heterodestructivos.
- Mayor frecuencia de enfermedades psicopatológicas y psicosomáticas.
- Víctimas directas de la violencia por parte del padre o la madre.
- Más probabilidad de ser agresores o víctimas de violencia, lo que se ha llamado violencia transgeneracional (la violencia se aprende).

1.3.3. CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DEL AGRESOR

Se han estudiado y observado:

- Sentimientos de frustración y resentimiento.
- Riesgo de pérdida de mujer, hijos e hijas.
- Riesgo de detención y condena.
- Rechazo familiar y social.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

"No te saltes las señales. Elige vivir".

(Lema de la campaña estatal contra la violencia de género, lanzada en septiembre de 2011).

Campaña institucional y estatal "Hay salida", presentación el 22 de noviembre de 2012:



Fuente: [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

Para poner en práctica...



¿Sabes si en España se han adoptado planes específicos en materia de violencia de género, desde el ámbito estatal?



¿Conoces otros instrumentos de planificación adoptados con posterioridad a la aprobación de la llamada "ley integral" o LOMPIVG?

2.1. LOS PIOM Y PLANES DE ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1.1. LOS DISTINTOS PLANES ANTES DE LA APROBACIÓN DE LA LOMPIVG

En España, desde 1984 se empezaron a dar las primeras respuestas institucionales contra la violencia de género. En este año, el Ministerio del Interior inició la publicación de las cifras relativas a denuncias por malos tratos en las comisarías de la Policía Nacional y se creó la primera Casa de Acogida para mujeres maltratadas y dos años después, el 5 de noviembre de 1986, la Comisión de Derechos Humanos del Senado creó la **Ponencia de Investigación de Malos tratos de Mujeres**, que elaboró un informe sobre el tema, en 1989.

Por otra parte, ya en la Unidad 2, epígrafe 5, se habló de las Políticas públicas nacionales en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entre ellas, se aludió a la elaboración, a lo largo de los años, de distintos Planes de Igualdad de Oportunidades de las mujeres (PIOM) y de un Plan Estratégico de igualdad de oportunidades. Fue el III PIOM (1997) el que contaba con un área dedicada exclusivamente a violencia.

En el mes de septiembre de 1997, la Conferencia Sectorial de la Mujer acordó celebrar una Conferencia Sectorial Extraordinaria sobre Violencia, que se llevó a cabo en el mes de noviembre, donde se tomó el acuerdo de elaborar un Plan de Acción sobre la Violencia contra las Mujeres para finales de marzo o primeros de abril de 1998. Hasta tanto este Plan estuviera elaborado, el Consejo de Ministros en el mes de enero de 1998 aprobó una serie de medidas urgentes contra los malos tratos a mujeres.

Por fin, en 1998 se aprobó el **I Plan de Acción contra la violencia doméstica (1998-2000)**. En el mismo, pese a emplear aún el término de "violencia doméstica" y no de género, se recogía lo siguiente: "*La sociedad*

española ha ido tomando conciencia no sólo de la gravedad de la violencia contra la mujer, sino también de la verdadera dimensión que este problema comporta. Hoy, la violencia contra la mujer ha superado la dimensión privada y ha pasado a ser considerada como un atentado hacia la propia sociedad, como un ataque a la esencia de la democracia”.

Este Plan se articulaba en torno a seis grandes apartados: sensibilización y prevención, educación y formación, recursos sociales, sanidad, legislación y práctica jurídica (por primera vez, se prevé reformar la legislación para incluir medidas que impliquen la distancia física forzosa del agresor) e investigación.

En mayo de 2001, el Consejo de Ministros aprobó el **II Plan de Acción contra la violencia doméstica 2001-2004**, con el objetivo de fomentar una educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia, mejorar la legislación y el procedimiento legal, para conseguir una mayor eficacia en los procesos, con una mejor protección de la víctima y una penalización más contundente del comportamiento de los agresores; completar el mapa de recursos sociales en todo el territorio nacional y potenciar la coordinación entre las actuaciones de los diferentes organismos y de las organizaciones sociales. En este II Plan, las medidas se articulaban en torno a cuatro grandes áreas: medidas de sensibilización y prevención, medidas legislativas y procedimentales, medidas asistenciales y de intervención social e investigación.



Para consultar

I Plan de Acción contra la violencia doméstica (1998-2000) Está publicado en: Instituto de la Mujer. 1999. *Plan de acción contra la violencia doméstica 1998-2000*. Madrid: Editado por el Instituto de la Mujer.

Texto del [II Plan de Acción contra la violencia doméstica 2001-2004](#)

Con posterioridad, se pasó a elaborar no ya un Plan, sino una ley que articulara de manera conjunta todas las medidas de lucha contra la violencia de género, punto que se desarrollará en el epígrafe 5.

2.1.2. PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TRAS LA APROBACIÓN DE LA LOMPIVG

Esta Ley contempla la elaboración de un **Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la violencia de género** y fue aprobado el 15 de diciembre de 2006, para el periodo 2007-2008. El mismo se justifica desde la constatación de que *"la realidad social nos demuestra que a las mujeres, la mitad de la ciudadanía, les queda todavía un largo camino que recorrer para situarse en posición de igualdad en relación con los hombres en cuanto al disfrute de los derechos que les corresponden como ciudadanas"* y de que *"la violencia de género es, pues, la manifestación extrema de la desigualdad, la evidencia de un déficit democrático y uno de los síntomas de la incompleta ciudadanía de las mujeres"*.

Según dice la propia LOMPIVG, el objetivo del Plan es *"que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de género"*. También dice la LOMPIVG que el Plan, además, deberá dirigirse *"tanto a hombres como a mujeres desde un trabajo comunitario e intercultural"*. Precisamente al hablar de perspectiva de género, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención pretende revocar la división de espacios y responsabilidades desde los que actúan hombres y mujeres. Se organiza en torno a dos parámetros de actuación: la sensibilización y la prevención.

Los elementos fundamentales que componen el Plan son los siguientes:

NIVEL DE PREVENCIÓN	Prevención primaria	Prevención secundaria	Prevención terciaria
EFECTOS DE LA INTERVENCION	LARGO PLAZO		
	CORTO Y MEDIO PLAZO	LARGO PLAZO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	Mejorar la respuesta frente a la violencia de género.	Conseguir un cambio en el modelo social avanzando en el derecho de ciudadanía (promoviendo la autonomía el empoderamiento).	
ACTORES IMPLICADOS	PODERES PÚBLICOS ORGANIZACIONES Y PERSONAS EXPERTAS SOCIEDAD CIVIL		
EJES DE INTERVENCION	a. Justicia b. Seguridad c. Salud d. Servicios Sociales e. Información	f. Educación g. Comunicación	
EJES TRANSVERSALES	h. Investigación y estudio i. Formación de profesionales j. Movilización de actores k. Coordinación de actores l. Seguimiento y evaluación		



Para consultar

Plan Nacional de Sensibilización y prevención de la violencia de género.

Fuente: [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

Además del Plan, también en diciembre de 2006, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobó un **Catálogo de Medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género**, con el objetivo de dotar de nuevo impulso a la LOMPIVG. Para ello, las medidas urgentes tenían el objetivo de reforzar algunas de las medidas ya en marcha, y sobre la base de la experiencia, implementar nuevas medidas de coordinación que redundaran en una mayor eficacia de las mismas. El principal objetivo era proteger a las víctimas.

Para ello, se preveían veinte medidas agrupadas en cuatro grandes objetivos:

- Aumentar la atención y la sensibilización (Teléfono único de información 24 horas y Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud).
- Reforzar los mecanismos judiciales y de protección judicial (Creación de nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, ampliación de plantilla de Fiscales dedicados a violencia sobre la mujer, creación de nuevas Unidades Forenses de valoración integral y especialización de Juzgados Penales, garantía del turno de oficio y modificaciones legislativas).
- Mejorar la coordinación de los/as profesionales que se dedican a la atención a mujeres víctimas de violencia y de los recursos de todas las Administraciones.
- Conseguir la máxima inhibición de las personas maltratadoras y agresoras, mediante:
 - El diseño y la aplicación de un modelo específico de intervención dirigido a las personas condenadas por delitos relacionados con la violencia de género en los casos de sustitución o suspensión de la pena privativa de libertad.
 - La implantación nacional de los programas de rehabilitación a maltratadores en régimen abierto, extensión de los programas de rehabilitación de maltratadores en régimen cerrado.
 - El uso de dispositivos de detección de proximidad del agresor.
 - La adopción de Planes concertados con empresas para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, así como el control de separación de la función Pública de los maltratadores.

**Para consultar****Medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género.****Fuente:** [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

Los Planes anteriores se vieron completados por la adopción del **Acuerdo por el que se adoptan medidas adicionales en la lucha contra la violencia de género**, aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de marzo de 2007, y por el **Acuerdo por el que se adoptan acciones para dar cumplimiento a las propuestas aprobadas por unanimidad por el Congreso de los Diputados en materia de violencia de género** con 28 acciones adoptado por el Consejo de Ministros el 22 de junio de 2007, para garantizar la inmediata ejecución de las propuestas del Congreso de los Diputados que se recogen en la moción acordada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el 19 de junio de 2007.

**Para consultar****Acuerdo por el que se adoptan medidas adicionales en la lucha contra la violencia de género, aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de marzo de 2007:**

- Encargo al Instituto Nacional de Estadística de nuevos estudios sociológicos y prospecciones estadísticas que proporcionen información fiable para avanzar en la lucha contra la violencia de género, incluida la Encuesta Nacional de Salud 2006.
- Potenciación del servicio de teleasistencia móvil, que contaría con hasta 20.000 teléfonos gratuitos disponibles, al mismo tiempo que se difunde la utilidad y eficacia del servicio, y se agilizan los trámites para la obtención de los teléfonos.
- Estudio del fenómeno de la violencia de género entre las mujeres del mundo rural.
- Creación durante 2007 de 43 Juzgados de Violencia y ampliación en igual número de la plantilla de fiscales.
- Creación de siete nuevas unidades forenses de valoración integral.
- Suscripción de convenios con empresas que tengan una difusión masiva de sus productos o correspondencia postal.

- Acuerdo con la Asociación "Autocontrol" (que integra a los profesionales de los medios de comunicación) para elaborar un código de autorregulación en el tratamiento de las noticias sobre violencia de género.
- Puesta en marcha del Fondo de Garantía de Alimentos, previsto en la Ley de Presupuestos de 2007.
- Envío a todos los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, material informativo sobre las medidas de protección y los derechos económicos, laborales y sociales de las mujeres víctimas de la violencia de género.
- Cesión de uso a las asociaciones y organizaciones de mujeres de inmuebles adecuados para ser utilizados como casas de acogida de mujeres víctimas de la violencia de género.



Para consultar

Acuerdo por el que se adoptan acciones para dar cumplimiento a las propuestas aprobadas por unanimidad por el Congreso de los Diputados en materia de violencia de género, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de junio de 2007:

De acuerdo con este Acuerdo, el Ministerio de Trabajo se comprometía a presentar próximamente al Consejo de Ministros un Informe sobre la magnitud y evolución del fenómeno de la violencia de género, con determinación de la efectividad de las medidas de protección acordada para las víctimas y a convocar en ese mismo año conferencias sectoriales para coordinar con las Comunidades Autónomas las políticas en materia de violencia de género.

Así mismo, el Acuerdo recogía el compromiso de diseñar un plan de comunicación que incluyera campañas de sensibilización, medidas relacionadas con la Administración de Justicia, las Fuerzas de y Cuerpos de Seguridad, así como el compromiso de ciertas partidas presupuestarias en materia de violencia de género.

Fuente: [La Moncloa. Gobierno de España](#)

Por otra parte, el **Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2008-2011** (ahora en fase de evaluación para elaboración de uno nuevo), ya citado en la Unidad 2, dedica el décimo de sus doce Ejes de actuación a la violencia. En la introducción de este Eje, se recoge respecto de la violencia de

género lo siguiente: *"sustentada en unos principios y valores que tratan de perpetuar la posición de inferioridad de las mujeres, es la máxima manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres. Evidencia, por ello, un déficit democrático y es uno de los síntomas de la incompleta ciudadanía de las mujeres"*.



Para consultar

Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2008-2011, aprobado en 2007:

Los objetivos estratégicos del **Eje de violencia de género** de este Plan eran:

Objetivo 1: Promover el conocimiento del fenómeno, así como la publicación y difusión de los estudios realizados.

Objetivo 2: Fortalecer las medidas de sensibilización y prevención de la violencia de género e incrementar el grado de implicación de la sociedad para combatirla desde un mejor conocimiento de las causas y consecuencias de este fenómeno violento.

Objetivo 3: Mejorar la atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Objetivo 4: Reforzar la protección policial y judicial de las víctimas de la violencia de género.

Objetivo 5: Intensificar la formación y especialización de profesionales que intervienen en las situaciones de violencia de género.

Objetivo 6: Promover y consolidar procedimientos de coordinación intra e interinstitucionales para garantizar una mayor eficacia de la respuesta frente a las situaciones de violencia de género.

Objetivo 7: Afianzar el seguimiento y evaluación continua de las medidas puestas en marcha en la lucha contra la violencia de género, con el fin de determinar la eficacia de la respuesta y su impacto en la evolución del fenómeno violento.

A su vez, cada objetivo preveía el desarrollo de diversas acciones para su cumplimiento.

Fuente: [Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades \(2008-2011\)](#)

En febrero de 2012, se ha anunciado la aprobación de un **Plan personalizado contra la violencia de género, en enero de 2013** aún no estaba aprobado.



Para consultar

Plan personalizado contra la violencia de género de febrero de 2012:

El Plan se articulará sobre tres ejes básicos: la personalización y cercanía a las víctimas, la unidad de todas las administraciones y fuerzas políticas y la transversalidad, para abordar el problema desde todas las perspectivas posibles. Algunas de las primeras medidas del Plan serán las siguientes:

- Se creará una Red Nacional de Unidades de Violencia de Género, con las Unidades destinadas a la lucha contra esta lacra de las Delegaciones del Gobierno.
- Se duplicará el personal de las Unidades para facilitar el seguimiento personalizado de cada caso.
- Se creará una Comisión Interministerial junto a los Ministerios de Justicia e Interior para evitar la descoordinación y promover el funcionamiento conjunto de las bases de datos.
- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad promoverá un acuerdo con las administraciones competentes para optimizar todos los recursos disponibles.
- Se ofrecerá una atención integral y especializada a los menores que son víctimas del maltrato porque se encuentran expuestos a situaciones de violencia de género.
- Se firmarán convenios con empresas para fomentar la contratación de mujeres que hayan sido víctimas de la violencia de género.
- Se garantizará un mayor acceso a los recursos. En el caso de los teléfonos de teleasistencia, se harán asequibles a las personas con discapacidad auditiva y se entregarán en el lugar más cercano posible al de residencia de la mujer, en colaboración con las entidades locales.
- Se creará una red de voluntarios y se promoverá que las víctimas de la violencia de género sean de la solidaridad y el apoyo social.

- Se elaborará un protocolo de asistencia a españolas que sufran malos tratos fuera de nuestras fronteras.

En el marco de la protección a las mujeres, el Ministerio también trabajará en la erradicación de otras formas de violencia sobre la mujer. En concreto, se ocupará de la trata con fines de explotación sexual, especial énfasis en la protección a las víctimas.

Fuente: [Para la Igualdad en el Empleo](#)

2.2. INSTITUCIONES EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2.2.1. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En la Unidad 2, entre los organismos de igualdad, se aludió a la **Delegación del Gobierno para la Violencia de Género**, que hoy en día sustituye a la **Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer** (creada por Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo, según mandato de la LOMPIVG).

Le corresponde a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia de género e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia y, especialmente, las siguientes funciones:

- a) El impulso de la aplicación del principio de transversalidad de las medidas destinadas a luchar contra las distintas formas de violencia de género, velando para que, en su aplicación, se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las víctimas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
- b) La sensibilización ciudadana y la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer. Para ello, se impulsará la educación

en los valores de igualdad y respeto a los derechos fundamentales en colaboración con las Administraciones públicas educativas y se realizarán campañas de información y sensibilización, garantizando el acceso a las mismas de todas las personas con especiales dificultades de integración y, particularmente, de las personas con discapacidad.

- c) La promoción de la coordinación y la colaboración entre los distintos servicios competentes para garantizar una actuación integral en relación con la valoración y gestión del riesgo. Con este objetivo, se elaborarán planes y protocolos de actuación que garanticen la ordenación de las actuaciones y procedimientos de prevención, detección, asistencia, protección y persecución de los actos de violencia contra las mujeres, en colaboración con los departamentos ministeriales y Administraciones competentes.
- d) La promoción de la colaboración, a través de los instrumentos jurídicos adecuados, con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para proporcionar asistencia social integral a las mujeres víctimas de la violencia de género, así como a sus hijas e hijos.
- e) El impulso de la coordinación en el ámbito de la Administración General del Estado en materia de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la cooperación con las instituciones y Administraciones competentes para la atención y protección de las víctimas.
- f) La realización, promoción y difusión de informes, estudios e investigaciones sobre cuestiones relacionadas con las distintas formas de violencia de género.
- g) El diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de información en base a la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra las mujeres procedentes de las

Administraciones públicas y de otras entidades, al objeto de permitir el adecuado conocimiento de la situación y la evaluación y el grado de efectividad de las medidas implantadas. A tal fin, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se coordinará con el Instituto Nacional de Estadística y con las entidades implicadas.

- h) El fomento de la formación y especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de prevención, información, atención y protección a las víctimas.
- i) La promoción de la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que, desde la sociedad civil, actúan contra las distintas formas de violencia de género a la hora de programar y poner en práctica mecanismos y actuaciones tendentes a erradicar este fenómeno.
- j) Participar y mantener relaciones en el ámbito internacional, sin perjuicio de las competencias encomendadas a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



Para consultar

Fuente: [Delegación del Gobierno para la Violencia de Género](#)

2.2.2. OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Otro organismo creado por la LOMPIVG es el **Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer**. Es un órgano colegiado interministerial adscrito en la actualidad a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, al que corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional,

elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género.

Su función consiste en recabar cuanta información obre en poder de las instituciones, tanto públicas como privadas, que desde el ámbito social, sanitario, educativo, judicial y policial, entre otros, están implicadas en la lucha contra la violencia de género, para analizar la magnitud del fenómeno y su evolución. A tal efecto, está prevista la creación de una base de datos de referencia mediante la que se normalizará un sistema de indicadores mediante el establecimiento de criterios de coordinación para homogeneizar la recogida y difusión de los datos.

Otra de las funciones es erradicar la violencia de género y paliar sus efectos, a través de su asesoramiento y evaluación rigurosa de las distintas políticas, con el fin de proponer nuevas medidas y adoptar aquellas otras que permitan la corrección de las disfunciones observadas, para actuar de forma más eficaz y eficiente contra este tipo de violencia.

Fue creado mediante *Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.*



Para consultar

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Fuente: [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

Para consultar su Real Decreto de creación:

En el mismo, se enumeran así sus funciones, su composición (destacando la participación no solo de representantes institucionales, sino también de las distintas Administraciones, Fiscalía y Consejo General del Poder Judicial, sino de asociaciones de mujeres, asociaciones empresariales y sindicales, organizaciones no

gubernamentales, de consumidores/as y usuarios/as y personas expertas en violencia de género), mandato, funcionamiento y estructura:

Artículo 3. Funciones.

1. Para el cumplimiento de los fines encomendados en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en atención al mandato legal de colaboración con la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer tendrá las siguientes funciones:
 - a. Colaborar institucionalmente en materia de violencia de género, así como promover la colaboración entre el resto de instituciones implicadas.
 - b. Actuar como órgano de recogida, análisis y difusión de información periódica, homogénea y sistemática relativa a la violencia de género, procedente de las Administraciones Públicas, de otros órganos del Estado con competencias en esta materia y de entidades privadas. A tal efecto, se creará una base de datos de referencia y se normalizará un sistema de indicadores mediante el establecimiento de criterios de coordinación para homogeneizar la recogida y difusión de datos.
 - c. Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y sistemas de información relacionados con la violencia de género.
 - d. Recabar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha por las Administraciones Públicas, así como por entidades privadas, para prevenir, detectar y erradicar la violencia de género.
 - e. Evaluar el impacto de las políticas y medidas que se desarrollen con el fin de erradicar la violencia de género y paliar sus efectos.
 - f. Elaborar informes y estudios sobre la violencia de género, con el fin de conseguir un diagnóstico lo más preciso posible sobre este fenómeno social.
 - g. Asesorar a las Administraciones Públicas y demás instituciones implicadas, en materia de violencia de género, así como constituir un foro de intercambio y comunicación entre organismos públicos y la sociedad.
 - h. Realizar propuestas de actuación, en distintos ámbitos, tendentes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y a mejorar la situación de las mujeres víctimas de la misma, así como el seguimiento de estas propuestas.
 - i. Participar y mantener relaciones con instituciones internacionales similares, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- j. Elaborar, difundir y remitir al Gobierno y a las comunidades autónomas, anualmente, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre las mujeres, con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado y de la efectividad de las medidas acordadas: preventivas, educativas, jurídicas, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas. El informe destacará, también, las posibles necesidades de reformas normativas, con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres víctimas de esta violencia.
 - k. Realizar cuantas actuaciones le sean encomendadas para el mejor cumplimiento de sus fines.
2. Los informes, estudios y propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios públicos y a los recursos privados, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad. En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán con el mayor grado de desagregación posible, incluyendo siempre la variable de sexo.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

Para acceder a los distintos Informes anuales de este Observatorio, el último de los cuales ha sido publicado en noviembre de 2011:

[Delegación del Gobierno para la Violencia de Género](#)

2.2.3. EL MINISTERIO FISCAL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

También en la LOMPIVG se contemplan normas que afectan a las funciones del Ministerio Fiscal, mediante la creación del **Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer**, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una **Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales** a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia.

El papel de la Fiscalía resulta fundamental en materia de violencia de género, pues debe intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia de Género, sabiendo que le corresponde la tutela de los derechos de las víctimas del hecho criminal y, además, en los procesos civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de los hijos/as menores de la pareja en la que ha existido violencia de género.

Las funciones del Fiscal contra la violencia sobre la mujer son las siguientes:

- a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- b) Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado, en los procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren.
- d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones.
- e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género.

En cuanto a las Secciones especializadas, serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo preferencia quienes por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias. Las funciones de estas Secciones serán:

- a) Intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
- b) Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos que permitirá la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia, al efecto en cada caso procedente.

La LOMPIVG también prevé la creación de Delegados/as en las Jefaturas de Fiscalía para las distintas materias, como por ejemplo la de violencia de género, cuando sea necesario por volumen de casos.



Para consultar

Página institucional de la Fiscalía especializada en violencia sobre la mujer, así como las distintas memorias de Fiscalía, Circulares e Instrucciones en materia de violencia de género, como:

- Circular 4/2003, 30 de diciembre de 2003, sobre nuevos instrumentos jurídicos en la persecución de la violencia doméstica.
- Circular 4/2005, 18 de julio de 2005, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

- Consulta 2/2006, 10 de julio de 2006, sobre la prisión preventiva acordada en supuestos de malos tratos del artículo 153 del Código Penal. Límite de su duración.
- Instrucción 2/2005, 2 de marzo de 2005, sobre la acreditación por el Ministerio Fiscal de las situaciones de violencia de género.
- Instrucción 4/2004, 14 de junio de 2004, acerca de la protección de las víctimas y el reforzamiento de las medidas cautelares en relación con los delitos de violencia doméstica.
- Instrucción 7/2005, 23 de junio de 2005, el Fiscal contra la violencia sobre la mujer y las secciones contra la violencia de las Fiscalías.
- Circular 6/2011, 2 de noviembre de 2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer.

Fuente: Fiscal.es

2.2.4. UNIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En el anteriormente mencionado Catálogo de Medidas Urgentes en la lucha contra la violencia de género, de diciembre de 2006, se crearon, dependiendo del antiguo Ministerio de Igualdad e integradas orgánicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente.

A partir de 2007, se reforzaron las existentes, pasando a existir una **Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer** y, en todas las Subdelegaciones del Gobierno, una **Unidad de Violencia sobre la Mujer**, con el fin de garantizar el seguimiento y coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género.

Las nuevas Unidades de Violencia sobre la mujer desarrollan las siguientes funciones:

- Apoyo a la protección integral de las víctimas de violencia de género: identificando necesidades de recursos para la protección de las víctimas, valorando perfiles de mayor vulnerabilidad y trasladando las conclusiones.
- Seguimiento de las situaciones de violencia de género: vigilancia de los casos que se registren en cada provincia, con especial atención a

los calificados de mayor riesgo, los que dejen sin efecto las medidas cautelares de protección a solicitud de la víctima y los que sean comunicados por la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Asimismo, se realizará un análisis de las muertes por violencia de género.

- Informe trimestral de seguimiento de la violencia de género y la respuesta institucional: datos estadísticos, datos sobre recursos disponibles, actuaciones realizadas y propuestas de actuación.
- Protocolos: para apoyar a las víctimas y las distintas actuaciones se seguirá lo establecido en los protocolos suscritos entre la Administración General del Estado y otras entidades, instituciones y administraciones públicas.

Hoy en día, según la legislación vigente, dependen funcionalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer, integradas orgánicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente. La coordinación funcional de estas unidades corresponderá a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

3. LAS PRIMERAS REGULACIONES CONTRA LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO PENAL. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

"A la mujer no se le maltrata por ser madre, novia o ama de casa, sino por ser mujer, por ello es importante delimitar conceptualmente la violencia que se ejerce sobre la mujer, ya que al denominarla incorrectamente (por ejemplo como " violencia doméstica" o " violencia familiar") se está relacionando sólo con ambiente concreto, el familiar o doméstico, y de ahí se puede pasar con relativa facilidad a limitarlo a determinados tipos de familia, a ciertas circunstancias, a algunos hombres que son enfermos, alcohólicos o especialmente violentos, o también a mujeres que los provocan".

(Hermanos LORENTE ACOSTA, forenses, Agresión a la mujer maltrato, violación y acoso. Entre la realidad y el mito cultural. Ed. Comares. Granada 1998, p.85).

Para poner en práctica...



¿Sabes desde qué fecha se castiga en nuestro Código Penal el maltrato habitual?



¿Conoces las penas aplicables a distintas formas de violencia dentro de la pareja? ¿Y en qué varía la penalidad si quien las comete es el hombre respecto de su pareja femenina?

También en la Unidad 5, se han ido enumerando las reformas significativas en materia de violencia de género y así, de forma breve las enumeramos:

- *Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal:* por primera vez introduce la tipificación de la violencia física habitual entre cónyuges o personas unidas por análoga relación de

afectividad, así como sobre los hijos/as sujetos a la patria potestad, o pupilo, menor o incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, con independencia de la gravedad de las lesiones, en lo que entonces era el artículo 425 del Código. La doctrina especializada entendió que se castigaba una conducta diferenciada, más allá de las lesiones en sentido estricto, configurándose como el ejercicio reiterado de las conductas que antes estaban tipificadas en la falta de maltrato.

- Más tarde, con la *Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal*, por la que se aprueba un nuevo Código, el entonces artículo 153 (heredero del anterior) recogía una pena más severa y la posibilidad del concurso con los delitos o faltas concretos. Y en cuanto a los sujetos pasivos, contempla al cónyuge o persona al que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos/as propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de uno u otro.
- Después, la *Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1999 en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal*: introduce en ese tipo penal también la violencia psíquica y se extiende el círculo de sujetos pasivos del delito desde el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad a quien lo fue y ya no lo es. Para más aspectos de esta reforma, ver Unidad 5, epígrafe 3.6. Además, el artículo recoge una definición de habitualidad para disipar el margen de discrecionalidad judicial y permite la punición del delito de maltrato en concurso con la de los posibles delitos o faltas en que se incardine cada concreto acto de violencia física o psíquica. También esta ley modifica la falta de lesiones y la falta de malos tratos y de injurias, etc. Además, introduce la posibilidad de fijar el alejamiento como pena accesoria (tanto para delito como para falta), como medida de seguridad o como condición de la suspensión de condena.

También introduce el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la primera posibilidad de adoptar medidas cautelares consistentes en la prohibición para el imputado de acercarse a la víctima o de comunicarse con ella:

"En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma.

En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales o Comunidades Autónomas o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas.

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad de continuidad de esta última, tanto durante la vigencia de la medida como tras su finalización".

- *Ley Orgánica 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica: creación del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la medida cautelar llamada "orden de protección", que se desarrollará en el epígrafe 4.*
- *Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, así como la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (aunque esta última no afecta a los delitos que tienen que ver con la violencia cometida*

en el ámbito de una pareja): suponen el endurecimiento de la sanción de algunas conductas cuando ocurren en el ámbito de la relación de pareja. Además, a partir de la primera, se desdoblan los tipos penales:

- a) la conducta de violencia física o psíquica habitual quedaba castigada en el artículo 173.2 del Código Penal, si se comete sobre *"quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados"*,
- b) mientras, el artículo 153 castigaba en ese momento a *"el que por cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpear a o maltratara de obra a otro sin causarle lesión, o amenazara a otro de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos"*, si se cometía sobre alguno de los sujetos pasivos contemplados en el artículo 173.2.

La mencionada Ley 15/2003, de 25 de noviembre, añadió un cuarto párrafo al artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

"En caso de incumplimiento por parte del inculcado de la medida acordada por el juez o tribunal, éste convocará la comparecencia regulada en el artículo 505 para la adopción de la prisión"

provisional en los términos del artículo 503, de la orden de protección prevista en el artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar".

- La aprobación de la *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género ó LOMPIVG*, supone un nuevo giro, al recoger de una manera nítida el concepto de "violencia de género", como algo distinto al de violencia doméstica y de otras formas de violencia interfamiliar y que se desarrollará en los epígrafes 5 y 6.
- La *Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal*: puede consultarse la Unidad 5, epígrafe 3.11, para ver su contenido. Cabe destacar que no reforma ninguno de los tipos penales que habían quedado reformados con la LOMPIVG.

4. LA REGULACIÓN DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN RELACIONADA CON EL CONCEPTO DE "VIOLENCIA DOMÉSTICA"

"La desvalorización que la mujer sufre en la ideología patriarcal la prepara para poder moverse en el terreno de la ambigüedad. De esta forma podrá adaptarse al otro, soportarlo y ser convencida por él".

(Charo Altable, Licenciada en Geografía e Historia. Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y feminista).

Para poner en práctica...



¿Desde qué año existe la llamada "orden de protección"?



¿Sabes en qué consiste, quién la puede pedir y dónde y quién la concede? ¿Y cuánto dura?



¿Es posible que se dicte una orden de protección contra una mujer y en favor de un hombre?

4.1. OBJETIVOS, PRINCIPIOS DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN, LUGAR DE PRESENTACIÓN Y REQUISITOS PARA SU ADOPCIÓN

Esta trascendental reforma fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios en la *Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica*. Había comenzado a perfilarse en la Subcomisión parlamentaria creada por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 22 de octubre de 2002, con el objeto de "formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la

violencia de género. Tiene su fundamento en la *Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia (adoptada el 30 de abril de 2002)*, que recomienda a los Estados introducir, desarrollar y/o mejorar las políticas nacionales con base en los siguientes elementos: la seguridad máxima y protección de las víctimas; el fortalecimiento de la capacidad de asistir a las mujeres víctimas de violencia mediante la puesta en práctica de estructura de sostenimiento y asistencia óptimas que eviten una victimización secundaria; la adecuación del Derecho Civil y Penal, incluidos los procedimientos; y la formación especializada de los profesionales.

Aunque la Exposición de Motivos de la Ley hace alusión a que *"la violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la violencia de género constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes públicos"*, lo cierto es que crea un instrumento ágil y rápido para la protección de cualquier **víctima de violencia doméstica en general**, entendida como una de las mencionadas en el que entonces era el artículo 153 del Código Penal (y que corresponde al actual 173.2) y en el que, de una manera muy amplia, están comprendidas:

- Quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia,
- los descendientes, por naturaleza, adopción o afinidad,
- ascendientes por naturaleza, adopción o afinidad,
- hermanos/as por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente,
- menores o incapaces que con él convivan,
- menores o incapaces que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente,
- persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas

a custodia o guarda en centros públicos o privados.

Los **requisitos para la adopción de una orden de protección (medida cautelar dentro de un proceso penal)** son los siguientes:

SUJETOS	<ul style="list-style-type: none"> Que exista una de esas posibles víctimas nombradas en el artículo 173.2 del Código Penal.
ACTOS DELICTIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Que aparezcan indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad.
FACTOR DE RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Que resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el artículo.

En cuanto a quién puede solicitarla, la Orden de Protección podrá ser solicitada por la víctima o por aquellas personas que tengan con ella alguna de las relaciones de parentesco o afectividad a que se refiere el vigente artículo 153 del Código Penal. Por otra parte, como dispone el párrafo 2º del apartado 2 del artículo 544 ter LECR, sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de la misma Ley, las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos mencionados que fundamentan la Orden de Protección deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.

Respecto del **lugar en que puede presentarse,** puede hacerse en cualquier Comisaría de Policía, puesto de la Guardia Civil o dependencias de las Policías Autonómicas o Locales, siendo esta la opción más habitual; en el Juzgado o Fiscalía; en las Oficinas de Atención a la Víctima; en los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas; o en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de

Abogados. También podrá ser acordada por el Juez/a de oficio o instada por el Ministerio Fiscal. Su concesión o denegación siempre será resuelta por la autoridad judicial en una decisión que ha de revestir forma de Auto (y, por tanto, ser motivada) y que puede ser recurrida por las partes.

La Orden de Protección se solicitará a través de un modelo normalizado con las siguientes **características**:

- Sencillez, es decir, de simple cumplimentación por cualquier persona.
- Fácil accesibilidad, pudiendo obtenerse en un gran número de instituciones y organismos.
- Integridad, porque una sola petición abrirá la vía para la posible adopción de medidas penales, civiles y de asistencia y protección social.
- En cuanto al contenido, deberá en todo caso incluir una descripción de los hechos constitutivos de la infracción penal (delito o falta) en el que se fundamente la petición a efectos de lo dispuesto por el apartado 1 del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La mencionada Orden se configuró sobre la base de seis **principios básicos a los que responde su regulación**:

- a) **Principio de protección de la víctima y de la familia.** La razón de ser de la Orden de Protección reside en el objetivo fundamental de proteger la integridad de la víctima y de la familia frente al agresor. Dicho con otras palabras, el objetivo prioritario de la Orden de Protección es que la víctima y la familia recuperen la sensación de seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores del agresor. Por ese motivo, en los supuestos de violencia doméstica el acceso a una Orden de Protección se constituye en un derecho de la víctima.
- b) **Principio de aplicación general.** El Juez/a debe poder utilizar la Orden de Protección siempre que la considere necesaria para

asegurar la protección de la víctima, con independencia de que el supuesto de violencia doméstica sea constitutivo de delito o de falta.

- c) **Principio de urgencia.** La Orden de Protección debe -sin menoscabo de las debidas garantías procesales, ni del principio de proporcionalidad- obtenerse y ejecutarse con la mayor celeridad posible. Debe, pues, articularse un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la verificación judicial de las circunstancias de hecho y las consiguientes medidas de protección de la víctima.
- d) **Principio de accesibilidad.** La eficaz regulación de la Orden de Protección exige la articulación de un procedimiento lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todas las víctimas de delitos de violencia doméstica. Así pues, la solicitud de la orden debe adaptarse a criterios de sencillez, de tal modo que la víctima, sus representantes, etc., puedan acceder fácilmente al Juez/a para solicitarla, sin costes añadidos.
- e) **Principio de integralidad.** La concesión de la Orden de Protección por el Juez/a debe provocar, de una sola vez y de manera automática, la obtención de un estatuto integral de protección para la víctima, el cual active una acción de tutela que concentre medidas de naturaleza penal, civil y de protección social.
- f) **Principio de utilidad procesal.** La Orden de Protección debe facilitar, además, la acción de la Policía judicial y el subsiguiente proceso.

Al tratarse de una medida cautelar de la que puede derivarse la adopción de medidas restrictivas de los derechos del imputado (como su libertad deambulatoria), la ley exige que, antes de su adopción, el órgano judicial deberá convocar a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante y al agresor, asistido, en su caso, de abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal. Este trámite puede simultanearse con el acto de juicio de faltas, o con la comparecencia para la

decisión de si la tramitación ha de continuar por el cauce del juicio rápido, o con la comparecencia sobre prisión provisional. La ley marca que esa audiencia ha de celebrarse en el plazo máximo de 72 horas desde su solicitud.

4.2. CONTENIDO DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN, ÓRGANO JUDICIAL COMPETENTE Y PLAZO DE VIGENCIA DE LA ORDEN

El Auto que conceda una orden de protección puede contener medidas penales, o medidas penales y civiles, entre las que pueden contarse las siguientes:

MEDIDAS PENALES	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquiera de las previstas en la legislación procesal penal, como prohibición de residir en un determinado barrio, municipio, provincia o entidad local o autonómica. • Prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, etc. • Prohibición de aproximarse o comunicarse por cualquier medio, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas.
MEDIDAS CIVILES	<ul style="list-style-type: none"> • Determinación del régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los/as hijos/as. • Atribución del uso y disfrute del domicilio familiar. • Determinación del régimen de prestación de alimentos. • Cualquier disposición oportuna para apartar al o la menor de un peligro o para evitarle perjuicios (por ejemplo, las previstas en el artículo 158.3 del Código Civil, como prohibición de expedición de pasaporte a un/a menor o de que se le saque del territorio nacional).

Respecto de las medidas civiles, debe solicitarlas la víctima o su representante legal o el Ministerio Fiscal, pero en este último caso sólo si hay

menores o incapaces y siempre que no hubieran existido medidas acordadas ya previamente por un órgano del orden civil.

El **Juzgado competente**, a partir de junio de 2005, y por lo dispuesto en la LOMPIVG, lo es el Juzgado de Violencia sobre la mujer competente territorialmente (de ellos se hablará en el epígrafe 7), en el inicio de un proceso o como algo sobrevenido, si el riesgo surge a posteriori, salvo que deba resolver el Juzgado de Instrucción de Guardia (en caso de duda sobre competencia territorial, resolverá el juez/a ante el/la cual se haya solicitado).

Dado que la orden de protección es técnicamente una medida cautelar adoptada en el marco de un proceso penal en curso, la **vigencia de las medidas penales que contenga** puede durar hasta que haya sentencia firme o hasta un plazo fijado por el órgano judicial. Sin embargo, la vigencia de las medidas civiles viene definida de forma taxativa por ley y es de treinta días, prorrogables en otros treinta si dentro del plazo inicial se presenta demanda para proceso de familia en el orden civil (ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, si ya hay proceso penal). Dentro del segundo plazo, como mucho, este órgano judicial deberá confirmar, modificar o dejar sin efecto esas medidas civiles.

No debe olvidarse que, si el proceso penal es sobreseído de manera definitiva, cesará cualquier medida cautelar adoptada en él y, por ende, también la orden de protección. Del mismo modo, la sentencia firme sustituirá a la orden: si es condenatoria, se impondrá una pena que conllevará como pena accesoria la prohibición de aproximarse por un tiempo determinado y, si es absolutoria, cuando la sentencia sea firme (o antes si así lo declara la sentencia) cesará también la medida cautelar.

Hay que añadir que el haber obtenido una orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de protección, pues podrá hacerla valer ante cualquier Administración o autoridad y que éstas activen inmediatamente los instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas

jurídicos. Además, es inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica (desarrollado por el *Real Decreto 355/04, de 5 de marzo*). Como medidas sociales anejas a la Orden está el acceso a la renta activa de inserción, por ejemplo, de la que se hablará en el epígrafe 9.3.1.



Para consultar

[Formulario oficial con el que solicitar la orden de protección](#)



Para consultar

Protocolo para la implantación de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, de 3 de junio de 2004.

Poco después de la aprobación de la ley, se aprobó un Protocolo para la implantación de la orden de protección, suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Interior, el Gobierno de Canarias, el Gobierno Vasco, la Junta de Andalucía, la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Navarra, la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Fuente: [Poder Judicial](#)

Más tarde, se realizó una adaptación de este Protocolo, denominado **Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y coordinación con los órganos judiciales para víctimas de violencia doméstica y de género: (adaptado a la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), de junio de 2005.**

Fuente: [Observatorio para la violencia de género](#)

Algo después y desde la Comisión de seguimiento de la implantación de la Orden, se aprobó el *Protocolo de coordinación de los órdenes jurisdiccionales civil y penal para la protección de las víctimas de violencia doméstica*.

Un paso más en la mejora del seguimiento de la orden y otras resoluciones judiciales de alejamiento vino dado por la adopción del **Protocolo de actuación para la**

implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género (Acuerdo entre el Ministerio de justicia, el Ministerio del interior, el entonces Ministerio de igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal para la implantación del protocolo de actuación para el seguimiento por medio), en julio de 2009. Para consultarlo:

Fuente: [Poder Judicial](#)

4.3. LA ORDEN DE PROTECCIÓN EUROPEA

El 21 de diciembre de 2011, en el Diario Oficial de la Unión Europea, se ha publicado la *Directiva 2011/99/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la Orden Europea de Protección*, con el objetivo de fijar un marco legal mínimo para el reconocimiento mutuo entre Estados miembros de medidas de protección de las víctimas de un proceso penal, bien sean sentencias, bien resoluciones judiciales sobre medidas de vigilancia.

No todos los países que forman la Unión Europea han participado en la adopción de esta Directiva, así, tanto Irlanda como Dinamarca no quedarán vinculados por esta Directiva ni sujetos a su aplicación.

Las directrices que rigen el desarrollo de esta norma son las siguientes:

1. Solo se aplicará a las medidas de protección adoptadas en asuntos penales, sin que quepa extender la misma a medidas civiles, y sin perjuicio de la existencia de otros mecanismos europeos tendentes a hacer efectivo ese reconocimiento de resoluciones judiciales civiles.
2. No es necesario que se hubiere declarado mediante resolución firme la existencia de un delito penal para que pueda ejecutarse una orden europea de protección, sino que basta la concurrencia de un título legitimador bastante, que bien puede ser:

- sentencia (Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, a cuyos efectos se entiende por sentencia: "La resolución u orden firme de un Órgano judicial del estado de emisión por la que se establece que una persona física ha cometido una infracción penal y se le impone: 1) pena privativa de libertad o cualquier medida privativa de libertad, si se ha concedido la puesta en libertad condicional sobre la base de dicha sentencia o mediante una resolución ulterior de libertad vigilada; 2) una pena suspendida; 3) una condena condicional 4) una pena sustitutiva");
 - una resolución sobre medidas de vigilancia (Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, que la define como "Una resolución ejecutiva adoptada en el transcurso de un proceso penal por autoridad competente del Estado de emisión, adoptada con arreglo a su derecho y procedimientos nacionales que impongan a una persona física una o más medidas de vigilancia como alternativa a la prisión provisional").
3. No es preciso que la medida de protección sea adoptada por un órgano judicial penal, sino que es posible que la orden europea de protección pueda derivar de una autoridad civil o administrativa.
 4. Se establece un principio de prioridad o preferencia en la tramitación de la solicitud de una orden europea de protección, de tal forma que la autoridad encargada de su reconocimiento y ejecución en el Estado de ejecución deberá ponderar las circunstancias del caso, la fecha de llegada de la persona protegida y la gravedad del riesgo que corre la misma (art. 15).
 5. Es necesario respetar el principio de audiencia de la persona causante del peligro (presunto agresor), quien, además, dispone del derecho de impugnar la referida resolución.
 6. La orden europea de protección deberá ser traducida por la autoridad competente del Estado de emisión a la lengua oficial o

una de las lenguas oficiales del Estado de Ejecución. Asimismo, la notificación del incumplimiento (modelo normalizado del Anexo II) deberá ser traducida por la autoridad competente del Estado de ejecución a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de emisión (art. 17).

7. El Estado donde se pretenda ejecutar la orden europea de protección deberá disponer de instrumentos legales para su reconocimiento, sin que ello suponga que asuma competencias sobre las penas principales o medidas de seguridad impuestas al agresor, debiendo aceptar la existencia y validez de la medida de protección emitida por otro Estado, salvo las limitaciones previstas en la Directiva.
8. Deberá existir mayor grado de flexibilidad en el mecanismo de cooperación entre Estados miembros, debiendo el Estado de ejecución notificar a la persona protegida, al causante del peligro y a la autoridad competente del Estado de emisión las medidas adoptadas, así como cualquier incumplimiento, y siempre en el idioma que pueda ser comprendido por las partes. Asimismo, tampoco se exigirá a la persona protegida iniciar nuevos procedimientos ante el Estado de ejecución para obtener una resolución análoga y, por ende, a correr con los gastos que de ello pudieran derivarse. Los gastos que resulten de la aplicación de la presente Directiva correrán a cargo del Estado de ejecución, de conformidad con su Derecho nacional, con excepción de los ocasionados exclusivamente en el territorio del Estado de emisión (art. 18). En cualquier caso, se prevé un contacto directo entre las autoridades competentes de los diversos Estados implicados para la correcta aplicación de la orden europea de protección (art. 16).
9. La Directiva prevé la posibilidad, siempre que sea posible, de recurrir a medios electrónicos para llevar a la práctica las medidas adoptadas, así como la aplicación de la normativa europea sobre protección de datos (Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la Protección de Datos

Personales Tratados en el Marco de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal).

10. La necesaria y apropiada formación de Jueces, Fiscales, policía y personal judicial implicado en los procedimientos dirigidos a la emisión o reconocimiento de la orden europea de protección, así como la elaboración de campañas de información y sensibilización que incluya este tipo de medidas de protección de las víctimas de delitos.
11. El respeto al principio "non bis in ídem", lo que conlleva una armonización de las competencias de cada uno de los Estados miembros implicados en la emisión y ejecución de la orden europea de protección, impidiendo que el Estado de ejecución pueda asumir competencias distintas a las fijadas en esta Directiva.
12. La aplicación del principio de subsidiariedad establecido en el art. 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto de aquellas cuestiones no reguladas en la presente Directiva.
13. Esta Directiva deberá respetar los derechos fundamentales garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y por la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer. De otro lado, deberá ser completada por otros instrumentos europeos de protección de las personas en situación de peligro, tales como, la Decisión Marco 2008/947/JAI y la Decisión Marco 2009/829/JAI, ya citadas. No obstante, los Estados miembros podrán seguir aplicando los convenios bilaterales o multilaterales vigentes en la fecha de entrada en vigor de esta Directiva o que pudieran celebrar con posterioridad, en la medida que permitan ir más allá de los objetivos de esta y contribuyan a simplificar los procedimientos de adopción de medidas de protección, con la única condición de que deberán notificarlo a la Comisión (art. 19).

En cuanto al ámbito subjetivo de la misma, abarca no solo a las personas físicas víctimas de un delito de violencia de género, sino a cualquier víctima. En ningún momento alude, ni siquiera de forma expresa, a que la persona protegida sea mujer ni que la persona causante del peligro o agresora sea varón.

La Directiva fija un plazo máximo para la incorporación y armonización al Derecho interno para el 11 de enero de 2015. A diciembre de 2012, no parece haberse realizado ningún trámite para la transposición.

**Para consultar**

Directiva 2011/99/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la Orden Europea de Protección.

Fuente: [Euro-lex](#)

5. EL NUEVO CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (LO 1/2004 DE 28 DE DICIEMBRE)

"El objetivo de detallar tales atrocidades no es horrorizar al lector, sino tratar de avanzar en la resistencia a reconocer que las mujeres están viviendo actualmente en una época de extremos, crecientes y brutales feminicidios; una época en la cual el mito persiste entre muchas jóvenes mujeres, estudiantes privilegiadas, de que la revolución feminista ha sido cumplida y que tienen las mismas opciones y oportunidades que los hombres".

Diana E. Russell, doctora en psicología social y activista del feminismo, *Femicide in Global Perspective*.

Para poner en práctica...



¿Sabes por qué esta Ley se denomina "integral"? ¿Y qué tipo de medidas contiene?



¿A qué formas concretas de violencia de género se refiere?

5.1. ARTÍCULO 1 DE LA LOMPIVG

Aunque en la Unidad 1 ya se introdujeron estos conceptos, conviene analizar la diferencia entre los variados términos gramaticales que circulan, como "Violencia contra la Mujer," "Violencia de Género"; "violencia machista o sexista"; "Violencia Doméstica" o "Violencia Familiar o Intrafamiliar".

Siguiendo explicaciones de la magistrada Inmaculada Montalbán,

presidenta del Observatorio de Violencia del CGPJ, la primera delimitación conceptual necesaria para una aproximación al problema de la violencia sobre las mujeres, nos obliga a diferenciar el concepto de "Violencia Doméstica" y el concepto de "Violencia de género en el ámbito familiar o de la pareja". La Violencia Doméstica en un sentido amplio comprendería cualquier acción u omisión vejatoria o similar de uno o varios miembros de la familia contra los otros; en éste caso, el concepto abarcaría sin reparos los supuestos de violencia contra personas ancianas, hermanos o hermanas y otras personas del círculo familiar.

En un sentido más restringido, si la víctima es la cónyuge o mujer con la que el agresor tiene o ha tenido una vinculación, la violencia doméstica en realidad constituye una manifestación de la Violencia de Género, en cuanto que violencia cultural o de clase que tiene su origen en las desigualdades históricas tradicionalmente padecidas por las mujeres y sus hijos menores de edad. En éste sentido, Violencia de género en el ámbito familiar o de la pareja, sirve para señalar todas aquellas situaciones de amenazas, malos tratos físicos o psíquicos y agresiones sexuales ocasionadas a la mujer, dentro del ámbito familiar, de pareja o de cualquier otro tipo de convivencia y a sus hijos o hijas menores. Otras formas de violencia de género podrían ser la mutilación genital femenina, violaciones de guerra, el acoso sexual en el trabajo, etc.

En el ámbito internacional, el término más utilizado era el de "violencia contra la mujer", como ya se vio también en la Unidad 2, destacando sobre todo el documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 48/104, que contiene una "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".

Esta Declaración, en su artículo 1 ofrece una interpretación auténtica del concepto de "Violencia contra la Mujer", declarando:

"A los efectos de la presente Declaración por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada."

Este concepto de violencia contra la mujer tiene una doble virtualidad: de un lado, proporciona visibilidad a las mujeres como víctimas de la violencia sufrida dentro del ámbito familiar y personas individuales a las que se niegan los derechos fundamentales. De otro lado, elimina la privacidad como elemento justificador de la tolerancia o inactividad de los poderes públicos en el tratamiento de este fenómeno.

Diferenciar entre el significado del término sexo (diferencias biológicas entre mujeres y hombres) y el término "género" (diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres) resulta un instrumento útil para poner de manifiesto cómo algunas desigualdades son naturales, mientras que otras se han construido a lo largo de los siglos por una organización social patriarcal, y no están determinadas por la naturaleza. Entonces se acuña la expresión "violencia de género" como una parte de la violencia cultural que se ejerce, de forma mayoritaria por los hombres sobre las mujeres, y se manifiesta como una técnica de control que permite mantener a estas en una situación de inferioridad y subordinación. La denominación "Violencia de Género" tiene indudables ventajas: por un lado, nos señala las causas estructurales de la violencia, imbricadas en la histórica posición inferior de las mujeres en el ámbito familiar, social, económico y cultural; de otro lado, enlaza con el derecho y principio de igualdad, como regla social y proyecto de las sociedades democráticas.

¿Cuál ha sido la terminología legal en España? Los primeros datos estadísticos sobre la violencia en el ámbito familiar aparecen en España en el año 1.984, cuando se publicaron por el Ministerio del Interior el número de denuncias presentadas en las Comisarías de la Policía Nacional, bajo el enunciado de "denuncias por malos tratos".

En esa década de los ochenta, empiezan a divulgarse los términos "violencia familiar" y "violencia doméstica. Así, la Fiscalía General del Estado español, en el año 1998 dictó la Instrucción número 1/1998, en la que utiliza un concepto amplio de violencia doméstica, en cuanto que incluye las acciones u omisiones penalmente sancionables cuando se cometen por un miembro de la familia contra otro miembro que convive en el mismo domicilio.

En 2002, se creó un Observatorio contra la violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial. Más adelante, el mismo organismo (asumiendo la evolución conceptual) se convirtió en el actual Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

En la actualidad y de manera paulatina se está implantando y aceptando el término "Violencia de Género" para dar noticia de las muertes y lesiones sufridas por las mujeres a manos de sus cónyuges o parejas, sobre todo a partir de la aprobación de la LOMPIVG, que usa ese término desde su título y en su articulado. Como afirma la jurista María Durán, el vocablo y concepto ha encontrado grandes resistencias para ser recogido en el derecho positivo: unas veces por reparos gramaticales y otras por la tradicional "conceptuación abstracta y asexuada del sujeto de derecho". No obstante, paulatinamente se impone su aceptación, tanto en los documentos internacionales como en las leyes estatales y autonómicas.

La LOMPIVG pretende ser integral y multidisciplinar, pues además de medidas penales y procesales, abarca aspectos preventivos, de sensibilización, educativos, de potenciación de la asistencia social y psicológica, de protección e indemnización de las víctimas, prevención en el ámbito sanitario, formación integral de jueces y fiscales y policía, de tutela en el ámbito laboral, etc.

Consta de un Título Preliminar, cinco títulos con un total de 72 artículos, 20 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias y 7 disposiciones

finales. De acuerdo con su Disposición Final Séptima, entró en vigor el 28 de enero de 2005, a excepción de los Títulos IV (Tutela Penal) y V (Tutela Judicial), para los que se preveía una *vacatio legis* de seis meses.

Pese a la polémica lingüística que generó, finalmente recogió los términos de "género" y "perspectiva de género", contribuyendo así a su generalización y difusión. En el párrafo tercero de su Exposición de Motivos, justifica las razones de la nueva ley y declara:

"La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Por su parte, el artículo 1.1º de la LO 1/2004 resulta de especial relevancia, en cuanto que sirve para delimitar el objeto de la ley. Por su interés se reproduce literalmente:

"La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".

De esta redacción, se deducen varias cuestiones susceptibles de reflexión:

- a) En principio, sus medidas no afectarán a las mujeres que han sufrido violencia por hombres con los que no han mantenido vinculación afectiva, como serían los casos de violaciones por extraños, por amigos o familiares que no sean el cónyuge o persona con la que se mantiene análoga relación. La ley solo se refiere a la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres que sean o

hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Ofrece un concepto instrumental de Violencia de Género, referido a la violencia que se ejerce dentro del ámbito de relación matrimonial o análoga, contra las mujeres y de la que son víctimas directas o indirectas los hijos o hijas. Este concepto instrumental, si bien excluye otros supuestos de violencia sobre la mujer, tiene la virtualidad de cumplir un doble objetivo:

1. En primer lugar, tiene siempre presente los presupuestos sociológicos e ideológicos de este tipo de criminalidad, y mantiene la vinculación entre la noción de "violencia" y la noción de "discriminación", relación que aparecía por vez primera en la Declaración de 20 de diciembre de 1993, sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer. En su preámbulo declara:

"reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre".

La Violencia de género contra la mujer con la que el hombre mantiene vínculos hunde sus raíces en relaciones de dominio y sumisión en la construcción de identidades de género desiguales, en la división sexual del trabajo recreada por la economía capitalista y en el mantenimiento de relaciones patriarcales o pre-modernas en la esfera de la familiar.

2. En segundo lugar, el concepto instrumental de violencia de género de la ley integral, permitirá un análisis más sistemático y coherente de las respuestas legales e institucionales frente a las violencias que se ejercen sobre las

mujeres en el entorno familiar, y de la que son víctimas indirectas los hijos e hijas menores de edad.

- b) La frase contenida en el actual art. 1.1 "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" implica que la normativa asume una perspectiva de género. Supone que, como causa de la violencia contra la cónyuge o análoga, se usa una referencia sociológica y al factor cultural.



Para consultar

Esta nota de dominación y de desigualdad ha sido apreciada por nuestro Tribunal Supremo en numerosas Sentencias. La pionera es de la **Sala 2ª, S 26-12- 2002, nº 2197/2002, rec. 1693/2001**. Ponente: Giménez García, Joaquín, que considera los hechos enjuiciados, constituyen, por encima de las concretas calificaciones jurídicas, un hecho típico de violencia familiar caracterizado por una situación de intento de dominación del recurrente sobre su mujer que tiene su origen en la separación, lo que se ha diversificado en diversos ataques a bienes jurídicos con el denominador común de victimización de aquélla. Dice la sentencia: *"En el presente caso, los hechos que lo integran constituyen, por encima de las concretas calificaciones jurídicas, un hecho típico de violencia familiar caracterizado por una situación de dominación, o intento de dominación del recurrente sobre su mujer que tiene su origen en la separación existente y en la no aceptación de esta situación por aquél, lo que se ha diversificado en diversos ataques a bienes jurídicos con el denominador común de victimización de aquélla"*.

En la actualidad, las sentencias de los órganos judiciales españoles está incorporando el término de Violencia de Género. Ejemplo de ello es la Sentencia de fecha 28-02-2005, nº 2/05, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Asturias. En ella se deja sin efecto la atenuante de arrebató, apreciada por los miembros del Jurado, tras declarar probado que el acusado actuó "obcecado por los celos". En dicha sentencia se declara:

"El acusado se prevaleció de su condición masculina, peyorativamente machista, para atemorizar y tener sometida a su voluntad a la víctima que, por causa del miedo que tenía al agresor nunca tuvo el valor que debería para denunciar formalmente los

malos tratos, las amenazas de que era objeto y las continuas coacciones a que era expuesta por el acusado para que no hiciera uso de su condición de igualdad de género respecto al varón y poder desarrollar su vida con plena libertad de elección de pareja. Nos hallamos ante una víctima más de la violencia de género ejecutada por el acusado, que no quería que la víctima desarrollara todas sus capacidades como mujer en igualdad de condiciones que el hombre".

Las nuevas normas penales y procesales con frecuencia se refieren literalmente a delitos relacionados con la violencia de género sin contener una norma que los identifique de manera auténtica. Por ello, en una labor de interpretación sistemática de las normas, este concepto ha de integrarse con los art. 1.3 de la Ley Orgánica 1/2004 y con el art. 87 ter de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial, tras la redacción introducida por el art. 44 de la LO.1/2004.

Así, el artículo 1.3 de la LOMPIVG contiene una definición de las conductas reprobables que integran la violencia de género, disponiendo que *"La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad"*.

5.2. PRINCIPIOS DE LA LOMPIVG

En el artículo 2, la LVG establece los principios rectores encaminados a conseguir los fines que persigue, siendo éstos:

- Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.
- Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

- Reforzar los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.
- Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de las trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.
- Garantizar derechos económicos para su integración social.
- Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas.
- Fortalecer el marco penal y procesal vigente que aseguren una protección integral.
- Coordinar los recursos e instrumentos de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y la sanción adecuada a los culpables de los mismos.
- Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.
- Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección de las víctimas.
- Garantizar el principio de transversalidad de las medidas a fin de que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.

A los efectos de la consecución de dichos objetivos la LOMPIVG prevé un conjunto de medidas que pasamos a examinar en el siguiente apartado.

5.3. MEDIDAS QUE CONTEMPLA LA LOMPIVG

La LOMPIVG, en su Título I, prevé medidas de sensibilización en diferentes ámbitos que introduzcan en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, dirigido tanto a hombres como a mujeres, con un amplio programa de formación complementaria y reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones.

Las medidas de sensibilización se contemplan en diferentes ámbitos como el educativo, el de medios de comunicación y el sanitario:

5.3.1.EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Esta parte se regula en el Título I, Capítulo I de la LOMPIVG e incluye entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; así como los principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre todos y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, destacando el impulso de estas medidas desde los Consejos Escolares, incorporando a éste, la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defienden los intereses de las mujeres.

Establece en todos los ámbitos de la educación, desde la infantil a la enseñanza universitaria y enseñanza para adultos y las Universidades, medidas que contribuyen a la igualdad de género, respeto y no discriminación, siendo éstas:

- Transmisión y socialización en los valores morales de una sociedad justa y democrática.
- Formación en los/las estudiantes de identidades personales autónomas en las que cada individuo valore sus cualidades.

- Generación de competencias en los/las estudiantes para analizar críticamente las desigualdades de género y valorar la diversidad de los sexos como una riqueza en las relaciones simétricas de convivencia.
- Entrenar en procedimientos para la gestión y solución de los conflictos de género.
- La formación inicial y permanente del profesorado en los valores regulados en la LOMPIVG.
- La investigación y la enseñanza superior en los asuntos relacionados con las dificultades para la igualdad de género y no discriminación.

Asimismo, prevé la escolarización inmediata de los hijos/as afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. A los efectos de la consecución de los fines y objetivos previstos en la LOMPIVG, la misma prevé en las disposiciones adicionales 3 a 5 modificaciones puntuales a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, vigente entonces.

5.3.2.EN EL ÁMBITO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

Esta parte viene regulada en el Título I, Capítulo II de la LOMPIVG, considerando ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio y otorgando legitimación a la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan por objeto único la defensa de los intereses de la mujer, para ejercitar ante los Tribunales las acciones de cesación y rectificación de la publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria la imagen de la mujer.

La mencionada acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al anunciante a cesar en la publicidad atentatoria contra la

dignidad de la mujer y a prohibir su reiteración; mientras que la acción de rectificación pretende paliar los efectos producidos por la publicidad ilícita, trata de conseguir que se reponga la situación al estado en que se encontraba antes de la publicidad ilícita.

Para ello, la LOMPIVG, en su Disposición Adicional Sexta modifica el artículo 3, a) de la *Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad*, concretando y ampliando el concepto de publicidad ilícita al disponer que:

"Es ilícita:

a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género".

Con respecto a los medios de comunicación, les atribuye competencias a los efectos de que fomenten la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, evitando toda discriminación entre ellos, velando porque la difusión de informaciones relativas a la violencia de género sobre la mujer garantice la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad y no aborde la violencia de género de forma superficial.

Más tarde, la LOIGMH, en su artículo 41 volvió a abordar el tema de igualdad y publicidad, estableciendo lo siguiente:

"La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional".

**Para consultar**

Manual de estilo de RTVE en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

Fuente: [RTVE](#)

Y para leer un artículo de la periodista Pilar López Díez sobre: "¿Cómo tratan la violencia los medios de comunicación?", 2007.

Fuente: [Pilar López Díez](#)

5.3.3.EN EL ÁMBITO SANITARIO

Viene regulado en el Título I, Capítulo III de la LOMPIVG, donde se promueven actuaciones para la detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, con programas de sensibilización y formación del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar este diagnóstico precoz, la asistencia y rehabilitación de la mujer.

Se crea una *Comisión contra la Violencia de Género en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud*, cuya finalidad es apoyar y orientar la planificación de las medidas sanitarias contempladas en la LVG, evaluar y proponer las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia. Esta Comisión estará compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

En relación con este apartado, la Disposición Adicional Segunda relaciona este ámbito con el de la justicia, señalando que el Gobierno y las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género.

Se establece, asimismo, la obligación de la administración educativa de asegurar que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia.

5.4. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS SEGÚN LA LOMPIVG

El título II de la LOMPIVG se dedica a la regulación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este título se divide en distintos capítulos, que van recogiendo los distintos derechos y que iremos analizando:

5.4.1.DERECHO A LA INFORMACIÓN

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir información y asesoramiento adecuado a su situación personal. Para ello las Administraciones públicas deben disponer de servicios, organismos u oficinas que cumplan con estos fines. Dicha información deberá hacer referencia a las medidas contempladas en la LOMPIVG relativas a la protección y seguridad, los derechos y ayudas que se prevén, el lugar al que deben dirigirse para que les presten los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

5.4.2.DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL

Consiste en el derecho a contar con unos servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, asistencia social que prevé también para los y las menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, debiendo contar

los servicios sociales, en el caso de los y las menores, con personal específicamente formado para su orientación y atención (siendo este de los pocos puntos donde la LOMPIVG se refiere expresamente a ellos/ellas).

La LOMPIVG exige que las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales organicen estos servicios respondiendo a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Dichos servicios actuarán coordinadamente con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas.

¿Qué entiende la LOMPIVG por atención multidisciplinar? Esta implicará:

- La información a las víctimas.
- Atención psicológica.
- Apoyo social.
- Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
- Apoyo educativo a la unidad familiar.
- Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de los conflictos.
- Apoyo a la formación e inserción laboral.

5.4.3.ASISTENCIA JURÍDICA

Mientras que algunas Comunidades Autónomas han optado por conceder justicia gratuita a toda mujer víctima de violencia de género, con independencia de su situación económica, la LOMPIVG la concede a aquellas que, conforme a los criterios de la *Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita*, acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En ese caso, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado/a y procurador/a en todos los procesos y procedimientos administrativos que

tengan causa directa o indirecta con la violencia padecida, extendiendo la ley, dicho derecho, a la descendencia en caso de fallecimiento de la víctima.

Los Colegios de Abogados, en desarrollo de ello, han ido habilitando Turnos de Violencia, específicos, para cuya admisión se exige a los Letrados/la realización de cursos de especialización y una formación específica, procurando la designación urgente de letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género.

5.4.4.DERECHO AL CAMBIO DE APELLIDO

La LOMPIVG prevé que pueda solicitar el cambio de apellidos quien sea objeto de violencia de género, mediante un procedimiento de urgencia en que se resolverá por Orden del Ministerio de Justicia. Su desarrollo reglamentario se llevó a cabo mediante el *Real Decreto 170/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958 (BOE de 9 de marzo de 2007)*, en el que se establece que para ello, el o la solicitante deberá acreditar haber obtenido alguna medida cautelar de protección judicial en el citado ámbito. También prevé que la concesión no será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado ni en cualquier otro medio.

Más tarde, se ha aprobado la *Ley 20/2011, de 20 de junio, del Registro Civil (que entrará en vigor el 21 de junio de 2014)*. En la misma, existen tres artículos que se refieren a este supuesto:



Para consultar

Artículo 55. Autorización del cambio de apellidos en circunstancias excepcionales.

Cuando se trate de víctimas de violencia de género o de sus descendientes que vivan o hayan vivido en hogares en los que se haya producido tal situación, así como en aquellos supuestos en los que la urgencia de la situación o las circunstancias

excepcionales lo requieran, podrá autorizarse el cambio de apellidos por Orden del Ministerio de Justicia, en los términos fijados reglamentariamente.

Artículo 83. Datos con publicidad restringida.

1. A los efectos de la presente Ley, se considerarán datos especialmente protegidos:

- a) La filiación adoptiva y la desconocida.
- b) Los cambios de apellido autorizados por ser víctima de violencia de género o su descendiente, así como otros cambios de identidad legalmente autorizados.
- c) La rectificación del sexo.
- d) Las causas de privación o suspensión de la patria potestad.
- e) El matrimonio secreto.

Artículo 84. Acceso a los asientos que contengan datos especialmente protegidos.

Sólo el inscrito o sus representantes legales podrán acceder o autorizar a terceras personas la publicidad de los asientos que contengan datos especialmente protegidos en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Si el inscrito ha fallecido, la autorización para acceder a los datos especialmente protegidos sólo podrá efectuarla el Juez de Primera Instancia del domicilio del solicitante, siempre que justifique interés legítimo y razón fundada para pedirlo.

En el supuesto del párrafo anterior, se presume que ostenta interés legítimo el cónyuge del fallecido, pareja de hecho, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado.

Además, en materia económica, la LOMPIVG en la Disposición Adicional Primera también prevé la **exclusión de la recepción de ayudas y pensiones a los autores de violencia** (para que el que causa la muerte no pueda beneficiarse de la pensión de viudedad).

5.4.5.DERECHOS LABORALES Y PARA FUNCIONARIAS PÚBLICAS

De una manera similar a lo que se hace en materia de conciliación, se pretende crear unas situaciones protegidas que tienen que ver con la vida personal de la trabajadora, en este caso, con su condición de víctima de violencia de género, que deberá acreditar con alguna resolución judicial en que

conste ese extremo (orden de protección, sentencia condenatoria, etc) y de manera que esa condición no repercuta negativamente en su empleo. Por ello, la LOMPIVG introduce en el Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de disfrutar diversos derechos:

REDUCCIÓN DE JORNADA	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de jornada con reducción proporcional de salario. La LOMPIVG no marca límites. • Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores/as, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada.
REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> • Reajuste del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. • También a ejercitar según prevea el convenio colectivo, acuerdo con la empresa o individual.
AUSENCIAS Y FALTAS DE PUNTUALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. • No pueden computarse a efectos de despido objetivo por absentismo.
MOVILIDAD GEOGRÁFICA	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.

	<ul style="list-style-type: none"> • En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. • El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. • Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo. • Duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga judicial por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses. • El periodo de suspensión con reserva del puesto de trabajo previsto en el artículo 48.6 del ET, tendrá la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo.
EXTINCIÓN DEL CONTRATO	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de dimisión de la trabajadora, pero con acceso a la prestación de desempleo, si reúne los requisitos de cotización. • Sin necesidad de preaviso.
GARANTÍAS FRENTE AL DESPIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Previsión de nulidad de la extinción por causas objetivas o del despido disciplinario de la trabajadora que haya hecho uso de cualquiera de los derechos anteriores.

En materia procesal, las discrepancias surgidas en el ejercicio de estos derechos se tramitarán de manera preferente, igual que las surgidas en materia de conciliación, según ya se expuso en la Unidad 4.

Para las trabajadoras por cuenta propia, la LOMPIVG prevé la posibilidad de que durante seis meses se les exima de la obligación de cotizar, si acreditan la situación de violencia, y considerándose ese periodo como cotizado.

Para las funcionarias públicas, se han previsto unos derechos equivalentes a los de las trabajadoras por cuenta ajena:

REDUCCIÓN DE JORNADA	<ul style="list-style-type: none"> Reducción de jornada con reducción proporcional de la retribución, en los términos que prevea la Administración competente.
REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> Reajuste del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la administración. También a ejercitar según prevea la Administración competente.
AUSENCIAS TOTALES O PARCIALES Y FALTAS DE PUNTUALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda. No pueden dar lugar a la imposición de sanciones por falta de cumplimiento de la jornada establecida.
MOVILIDAD FUNCIONARIAL	<ul style="list-style-type: none"> Derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas

	<p>características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En tales supuestos, la Administración Pública competente en cada caso estará obligada a comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. • Para solicitarlo debe haber permanecido dos años en su puesto anterior. • Tratado como traslado forzoso.
EXCEDENCIA POR RAZÓN DE VIOLENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. • Por plazo inicial de seis meses, aunque puede prorrogarse judicialmente por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho. • Con reserva del puesto de trabajo y siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.

La Ley 3/ 2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en su Disposición final decimocuarta lleva a cabo modificaciones en materia de bonificaciones por la contratación de víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género o violencia doméstica y trabajadores en situación de exclusión social. A tales efectos se modifica el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo con la siguiente redacción:

«2. Asimismo, se regulan con carácter excepcional bonificaciones para los contratos temporales que se celebren con trabajadores con discapacidad o con personas que se encuentren en situación de exclusión social, siempre que, en

ambos casos, estén desempleados e inscritos en la Oficina de Empleo, así como con personas que tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o de víctima de violencia doméstica o con personas que tengan acreditada la condición de víctima del terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. »

Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, con la siguiente redacción:

«6. Las bonificaciones por contratación indefinida establecidas en los apartados 4, 4 bis y 5 serán de aplicación asimismo en los supuestos de transformación en indefinidos de los contratos temporales celebrados con las personas pertenecientes respectivamente a cada uno de los colectivos a que se refieren dichos apartados.»

Se modifica el artículo 37.7 del Estatuto de los Trabajadores, que queda redactado del siguiente modo:

«7. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctima del terrorismo tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o

conforme al acuerdo entre la empresa y los trabajadores afectados. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a estos, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.»

Se modifica el artículo 40.3 bis del Estatuto de los Trabajadores, que queda redactado del siguiente modo:

«3 bis. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo que se vean obligados a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores.

Terminado este período, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.»

5.4.6.PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

El artículo 21.3 de la LOMPIVG reconoce a las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género, una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el periodo en que dure la suspensión de la trabajadora sustituida o durante los seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Se trata con

estas medidas de que el derecho que tiene reconocido la mujer trabajadora no perjudique al empresario.

En paralelo, el artículo 21.5 establece, para las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, la posibilidad de suspender la obligación de cotización durante un periodo de seis meses, que le serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, siendo su situación asimilada al alta.

Estas bonificaciones son de las pocas que la reforma laboral de 2012 mantiene.

Asimismo, el artículo 22 de la LVG establece un programa específico de empleo para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, incluyendo entre otras medidas, aquellas que favorezcan una nueva actividad por cuenta propia. En el epígrafe 9.3, se desarrollará este aspecto.

5.4.7.DERECHOS ECONÓMICOS

Los derechos económicos se recogen en los artículos 27 y 28 de la LOMPIVG. Distinguimos entre **ayudas sociales** (artículo 27) y **acceso prioritario a viviendas y residencias públicas** (artículo 28). Ambos puntos se desarrollarán en el epígrafe 9.4 y 9.2.

5.4.8.DERECHOS DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO JUDICIAL

La LOMPIVG recoge de forma general un catálogo de derechos para las víctimas de violencia de género en cualquier proceso. Así, manteniendo medidas cautelares ya existentes en la legislación civil y penal procesal, establece la posibilidad de que en cualquier proceso judicial relacionado con violencia de género se adopten (de oficio o a instancia de la víctima, los/as

hijos/as, convivientes, Ministerio Fiscal o Administración) medidas cautelares consistentes en:

- Salida del domicilio de la persona agresora.
- Prohibición de comunicación y acercamiento a víctima u otras personas (con posibilidad de control telemático, antes sólo posible para control de condenas).
- Posibilidad de autorización judicial a la persona protegida para que concierte (con agencia o sociedad pública) la permuta del uso de la vivienda de la que sea copropietaria, por otra, por tiempo determinado.
- Suspensión del ejercicio de patria potestad o de la guarda y custodia para el inculpado por violencia de género.
- Suspensión de visitas al inculpado sobre sus descendientes.
- Privación para el inculpado del derecho a tenencia, porte y uso de armas, con obligación de depositarlas.
- Protección de datos personales de la víctima y menores a su guarda y custodia y limitación de la publicidad en cualquier proceso judicial.

Para adoptar estas medidas en algún proceso, la Ley exige auto motivado (con valoración de su proporcionalidad y necesidad) y previa intervención del Ministerio Fiscal y respeto a los principios de contradicción, audiencia y defensa.

Antes de la aprobación de la LOMPIVG, existían otras medidas cautelares, que ha mantenido vigentes. Entre éstas, hay que citar tanto la medida cautelar de alejamiento recogida en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y explicada en el epígrafe 3, la Orden de Protección (ya explicada en el epígrafe 4), la posibilidad legal de evitar a los/las testigos en su declaración la confrontación visual con el agresor a través de medios técnicos o audiovisuales que permitan la realización de la prueba y la previsión como excepcional de la posibilidad de practicar careo con testigos menores de edad (introducidas por la *Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de*

modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Y por último, como la más grave de las medidas cautelares, sigue existiendo la prisión provisional.

6. REFORMAS OPERADAS EN EL CÓDIGO PENAL POR LA LOMPIVG

Es una manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica sino de género. Se trata de una variable teórica esencial para comprender que no es la diferencia entre sexos la razón del antagonismo, que no nos hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta una posición de superioridad física (hombre) sobre el sexo más débil (mal llamado sexo débil), sino es consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. El género se constituye así en el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. Fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y otros exhiben los roles e identidades que le han sido asignados bajo la etiqueta del género. De ahí, la prepotencia de lo masculino y la subalternidad de lo femenino. Son los ingredientes esenciales de ese orden simbólico que define las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia de género”.

(Maria Luisa Maqueda Abreu, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada).

Para poner en práctica...



¿Conoces el alcance de la reforma hecha en el Código Penal por la LOMPIVG?



¿Y conoces por qué esa reforma ha suscitado controversia y en qué se basaba?

6.1 ÁMBITO DE LOS DELITOS AFECTADOS POR LA REFORMA

Para esclarecer qué delitos pueden incardinarse en el acto de violencia física y psicológica para constituir violencia de género, debe tomarse como criterio integrador de interpretación, el art. 44 de la LOMPIVG que adiciona un art. 87 ter en la LOPJ, atribuyendo, en su apartado 1, a los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer que crea, un listado de competencias en el orden jurisdiccional penal. Por su parte, se modifica por el art. 58 de la Ley Integral, el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que con idéntica redacción al nuevo artículo 87 ter de la LOPJ, establece las competencias de los nuevos Juzgados.

Así, el nuevo artículo 87 ter de la LOPJ y el modificado artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señalan que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en el orden penal, conocerán " *a) de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, b) de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares (...), c) de la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas (...), y del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del Libro III del Código Penal (...)*".

A la luz de estos preceptos, la violencia de género se integraría por los delitos comprendidos en el Título I ("Del Homicidio y sus formas"), Título II ("Del aborto"), Título III ("De las lesiones"), Título IV ("De las lesiones al feto"), Título VI ("Delitos contra la libertad"), Título VII ("De las torturas y otros delitos contra la integridad moral"), Título VIII ("Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales") del Libro II del CP y además, "*por cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación*". También integrarían la violencia

de género las faltas de los Títulos I (Contra las personas) y II (contra el patrimonio) del Libro III del CP.

Por lo tanto, el sujeto activo de las conductas punibles constitutivas de violencia de género, solo puede serlo un hombre. Ello implicaría que, en los casos de lesiones, amenazas y coacciones leves entre mujeres que mantengan una relación afectiva, no podrán serles de aplicación las novedades penales introducidas por esta Ley Integral.

En lo que concierne al sujeto pasivo de la violencia de género, del tenor literal del precitado art. 1.1, se deduce claramente que ha de serlo una mujer que sea o haya sido cónyuge o que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, pero se plantea la cuestión de si podrán serlo otros sujetos.

La respuesta ha de ser afirmativa, pues en las modificaciones penales que se examinarán, a continuación, se asimila a la mujer, en cuanto a la calificación jurídica de los hechos y a la pena a imponer, *"la persona especialmente vulnerable que conviva con el autor"*. Esta expresión que no se recogía en el Anteproyecto de Ley, fue introducida en el texto definitivo, como consecuencia del Informe del CGPJ, en el que se manifestaba que tan grave es la violencia ejercida sobre la mujer como la que se produce sobre menores, incapaces y personas ancianas.

La Ley en su título IV "Tutela Penal" (arts. 33 a 41) aborda una serie de modificaciones en el Código Penal, que van desde la elevación a la categoría jurídica de delito de determinadas conductas, agravación de la pena en otras hasta la fijación de nuevos requisitos para la sustitución y suspensión de la pena. A continuación, se expondrán estas modificaciones.

6.2 TIPOS PENALES Y PENAS APLICABLES

Hay que tener en cuenta que la LOMPIVG no reforma todos los delitos

en que pudiera cometerse violencia contra la mujer, ya que se centra en la que ocurre en el ámbito de la pareja. Pero tampoco en este contexto reforma todos los tipos penales, por entender suficientemente sancionados aquellos que recogen las conductas más graves, como el homicidio o el asesinato. Así, la reforma pretende endurecer lo que podrían considerarse formas más leves de violencia de género dentro de la pareja, con el fin de enviar un mensaje de "tolerancia cero" frente a cualquier manifestación.

Así, éstos son los delitos que han sido reformados por la LOMPIVG:

6.2.1 LESIONES AGRAVADAS (ART. 36 DE LA LOMPIVG)

Se añaden los apartados 4 y 5 al art. 148 del Código Penal, a fin de considerar como lesiones agravadas aquellas en las que "la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada a él (autor) por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia" (apdo. 4º) y aquellas en que "la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor" (apdo. 5ª).

Asimismo, se ha aprovechado la ocasión para mejorar técnicamente el apdo. 2 del art. 148 del CP, al introducir, junto al ensañamiento, la alevosía como circunstancias que agravan el tipo básico del delito de lesiones del art. 147. 1 del CP.

6.2.2 MALTRATO FAMILIAR (ART. 37 DE LA LOMPIVG)

Se modifica el art. 153 del Código Penal, excluyéndose del catálogo de conductas castigadas el amenazar a otro levemente con armas o instrumentos peligrosos, cuando el ofendido fuere alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2, dado que tal conducta se ha tipificado en los nuevos apartados 5 y 6 del art. 171 del CP.

Desde la LOMPIVG, se continúan castigando, en dicho precepto, la conducta de causar a otro, por cualquier medio o procedimiento, menoscabo

psíquico o una lesión no definida como delito en este Código o golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, si bien, el nuevo apartado 1 del art. 153 se refiere al supuesto en que la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o fuere una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor; y el nuevo apartado 2º engloba a las demás personas contempladas en el art. 173.2, a excepción de las anteriores.

En el Anteproyecto de reforma del Código penal que ha sido presentado en noviembre de 2012, se contempla añadir a este artículo un párrafo 5 que *"incluiría la posibilidad de imponer además de la condena una medida de libertad vigilada."* Y como en el Código desaparece la calificación de falta para convertirlas en delitos leves, el artículo al describir las conductas típicas, en vez de hablar de causar *"lesión no constitutiva de delito"*, *pasaría con la reforma a hablar de "lesión de menor gravedad"*.

6.2.3 AMENAZAS (ART. 38 DE LA LOMPIVG)

Se adicionan 3 apartados, numerados como 4, 5 y 6 al art. 171 del CP, a fin de elevar a delito las amenazas leves, sin armas o instrumentos peligrosos, cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como cuando la víctima fuere una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Hasta ahora, las amenazas leves sin armas o instrumentos peligrosos constituían una falta del art. 620 del CP, siendo constitutivas de delito tales amenazas, sólo cuando se efectuaban con tales instrumentos peligrosos contra alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 del CP. Sin embargo, con la nueva redacción, una misma conducta, el amenazar levemente sin armas o instrumentos peligrosos constituirá delito cuando la víctima sea o haya sido cónyuge, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como cuando la víctima fuere una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

En cambio, seguirá siendo una falta prevista en el art. 620 del CP, cuando se ejercite contra las demás personas mencionadas en el art. 173.2, a excepción de la mujer y la persona vulnerable.

6.2.4 COACCIONES LEVES (ART. 39 DE LA LOMPIVG)

Se añade un apartado 2 al art. 172 del CP, a fin de elevar a delito, al igual que en el supuesto de las amenazas, aquellas conductas que antes constituían falta del art. 620 del CP, siempre que la coacción leve se ejerza sobre la víctima sea o haya sido cónyuge, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como cuando la víctima fuere una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. En cambio, seguirán siendo falta prevista en el art. 620 del CP, cuando se ejercite contra las demás personas mencionadas en el art. 173.2, a excepción de la mujer y la persona vulnerable.

Al elevar a la categoría de delito las amenazas y coacciones leves, el legislador se ha visto obligado a añadir al apartado 2 del art. 620 del CP, la expresión "salvo que el hecho sea constitutivo de delito". Es decir, tales conductas punibles se castigarán como falta, siempre y cuando no sean constitutivas de delito.

El Anteproyecto de reforma de Código Penal presentado en noviembre de 2012 no prevé cambios en los tipos penales de amenazas leves y coacciones leves por violencia de género.

6.2.5 PENALIDAD COMÚN A LOS ANTERIORES TIPOS DELICTIVOS

El legislador, para las coacciones y amenazas leves, así como para las lesiones previstas en el art. 153 del CP, cuando la víctima sea o haya sido cónyuge, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o fuere una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor; prevé la imposición de

unas mismas penas consistentes en prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Además, se mantienen en el art 153 del CP, y se incorporan, también a los nuevos delitos de amenazas y coacciones leves, las agravaciones específicas que dicho precepto contenía, de manera que se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 del CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

Por último, ha de destacarse la concesión al Juzgador de la potestad de graduar la pena a imponer, rebajándola en un grado, cuando así proceda, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho.

Los delitos de los artículos 153, 171. 4, 5 y 6 y 172.2, castigan conductas aisladas. Si se aprecia que al mismo tiempo se produce una violencia física o psíquica habitual, se aplicaría en concurso con el delito de maltrato habitual del artículo 173.2, que no se ha visto modificado en su redacción por la LOMPIVG y, que por tanto, sigue redactado en genérico, sin indicar la masculinidad o feminidad de los sujetos implicados ni, por tanto, realizar una penalidad diferenciada atendiendo a ello.

6.2.6 QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA (ART. 40 DE LA LOMPIVG)

Con la reforma operada por la LOMPIVG, se incluye en el inciso final del nuevo apartado 1 del art. 468 del CP, la imposición de la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los que casos de quebrantamiento, cuando sus autores no estuviesen privados de libertad, que se contenía en la redacción

anterior, en el apartado 2.

Por su parte, el art. 468.2 del CP, en estos supuestos de quebrantamiento, dejaba en manos del Juez la potestad de imponer la pena de prisión de tres meses a un año o la de trabajos en beneficio de la comunidad de 90 a 180 días. Esta regulación, motivaba que los Tribunales fuesen reacios a la adopción de la prisión provisional ante el incumplimiento de una medida cautelar no privativa de libertad, máxime cuando el quebrantamiento, una vez enjuiciado, podía ser sancionado con trabajos en beneficio de la comunidad (pena no privativa de libertad).

Por ello, resulta de especial relevancia la modificación introducida a través del nuevo apdo. 2 del art. 468 del CP, en el sentido de que la consecuencia jurídica que lleva aparejado el quebrantamiento de una de las penas contempladas en el artículo 48 del CP (privación del derecho a residir o acudir a determinados lugares, prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima) o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2, ha de ser, en todo caso, la de pena de prisión de seis meses a un año.

Hay que recordar que el párrafo final del art. 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o LECrim en el supuesto de incumplimiento por el inculpado de alguna de las medidas cautelares en materia de violencia doméstica, contempla la posibilidad de adoptar prisión provisional, para evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, sin que sea preciso que el delito imputado esté sancionado con pena igual o superior a dos años de prisión (ex art. 503.1.3º, letra c) de la LECrim), o bien, la adopción de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de la libertad personal, que la medida cautelar infringida.

6.2.7 FALTAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ART. 41 DE LA LOMPIVG)

Tras la reforma, las conductas leves de violencia de género contra la mujer pareja o compañera o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, han sido todos elevados a la categoría de delito, quedando como falta únicamente la conducta de injuria leve o vejación injusta leve.

El Anteproyecto de reforma de Código penal presentado en noviembre de 2012 pretende eliminar en general las faltas y convertirlas en delitos leves.

6.2.8. DELITO DE MALTRATO HABITUAL

Debe destacarse que la LOMPIVG no reforma este artículo. Lo deja con la misma redacción que había dado la *Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros*, mencionada en epígrafe 3 y con la redacción del 173.2 transcrita en ese epígrafe). En el Anteproyecto de reforma de Código Penal presentado en noviembre de 2012 se suprimiría el segundo párrafo, que contiene cuatro posibles circunstancias de agravación del delito.

Y el Anteproyecto de Código Penal presentado en noviembre de 2012 introduciría un nuevo artículo 172 ter, con el siguiente contenido:

1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que, sin estar legítimamente autorizado, acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

1º La aceche o busque su cercanía física.

2º Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier

medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3º Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4º Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

5º Realice cualquier otra conducta análoga a las anteriores.

2. Cuando el artículo 173.2, la pena se impondrá en su mitad superior.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

6.3 SUSPENSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS

La LOMPIVG da una nueva redacción al párrafo segundo de la regla 6ª del apartado 1 del art. 83 del CP, y al apartado 3 del art. 84 del CP condicionando la suspensión de la ejecución de la pena en los delitos relacionados con la violencia de género, no sólo al cumplimiento de la prohibición de acudir a determinados lugares y de aproximarse o comunicarse, sino también a participar en programas educativos en materia de igualdad, y revocándose la suspensión en caso de incumplimiento. Como es sabido, la suspensión de las penas privativas de libertad puede solicitarse cuando no se tengan antecedentes penales y la condena no supere los dos años de prisión.

En cuanto a la sustitución de las penas, se modifica el párrafo tercero del apartado 1 del art. 88 del CP, disponiendo que la limitación de sustitución de las penas de prisión únicamente por trabajos en beneficio de la comunidad, no sólo sea aplicable cuando el reo hubiera sido condenado por el delito tipificado en el art. 173.2 CP sino, en todos aquellos casos en que lo hubiere sido por un delito relacionado con la violencia de género. La sustitución de una

pena de prisión por otra de otro tipo solo cabe solicitarse si la pena privativa de libertad no excede de un año o, de una manera más excepcional, de dos.

6.4 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

En el artículo 42, la LOMPIVG obliga a la Administración Penitenciaria a realizar programas específicos para los internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género, programas cuyo aprovechamiento y seguimiento por parte de estos internos, serán tenidos en cuenta por las Juntas de Tratamiento para las progresiones de grado, concesiones de permisos y de libertad condicional.

6.5 SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DICTADAS CON RELACIÓN A LA REFORMA PENAL OPERADA POR LA LEY INTEGRAL

La titular del Juzgado de lo Penal número 4 Murcia planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la redacción y aplicación del artículo 153.1 del Código Penal, que consideraba la norma desproporcional y discriminatoria, al sancionar de una forma indistinta las amenazas leves por violencia de género, respecto a las que se producen en otro ámbito, que se califican como falta y se sancionan con la localización permanente de cuatro a ocho días del agresor, en domicilio diferente y alejado de la víctima, o con trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días.

Frente a ella, se dictó la **sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de mayo de 2008 (STC 59/2008, de 14 de mayo de 2008)** que avala la constitucionalidad de la LOMPIVG.

El Tribunal Constitucional (o TC) tomaba como punto de partida el recuerdo de que corresponde en exclusiva al legislador el diseño de la política criminal, para el que "goza, dentro de los límites establecidos en la

Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática".

En resumen, el TC declaró que la igualdad reconocida en el artículo 14 de la Constitución no implica una prohibición de diferenciación, sino que es compatible con el trato diferenciado cuando: a) la diferencia jurídica persigue un fin legítimo y b) las consecuencias de la diferencia no son desproporcionadas. La prohibición de discriminación también está contenida en el artículo 14. Pero el TC discute la compatibilidad del art. 153.1 con el principio de igualdad general (art. 14.1) y no con la prohibición de discriminación contenida en el art. 14.2 de la Constitución, porque el motivo exclusivo de la diferenciación no es el sexo, sino el ámbito relacional en el que se producen las agresiones (en este sentido también STC 76/2008 de 3 de julio, de 2008).

La sentencia afirma que el objetivo y pretensión de la ley es "prevenir las agresiones que en el ámbito de la pareja se producen como manifestación del dominio del hombre sobre la mujer en tal contexto" y proteger así a la mujer en un ámbito en el que "el legislador aprecia que sus bienes básicos (vida, integridad física y salud) y su libertad y dignidad mismas están insuficientemente protegidos". También justifica que se imponga una pena mayor para prevenir a estas agresiones que "suponen un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural –la desigualdad en el ámbito de la pareja– generadora de gravísimos daños a sus víctimas". Afirma en síntesis que el desequilibrio 'no es patente y excesivo o irrazonable', puesto que la diferencia se produce: i) sólo en el mínimo de la pena; ii) hay una pena alternativa de trabajo en beneficio a la comunidad que es idéntica en ambos casos; iii) en el supuesto de circunstancias excepcionales la pena puede rebajarse un grado acudiendo al artículo 153.4.

Con esta sentencia el Constitucional avala por tanto que las penas sean mayores para el hombre que agrede a su mujer o ex mujer, que en los casos en los que es agresora la mujer y la víctima el hombre, sin estar en

contradicción constitucional con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. Se rechaza así que el artículo 153.1 del Código Penal incurra en discriminación por razón de sexo, porque no se impone esta condena mayor por ser varón, sino por una grave conducta que reproduce "un arraigado modelo agresivo" contra la mujer.

**Para consultar**

Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de mayo, así como a sus votos particulares.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

En la misma materia y resolviendo de manera acumulada sobre varias cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas por el Juzgado Penal 1 de Valladolid, se dictó una segunda sentencia en la materia, la STC 76/2008, de 3 de julio de 2008, también respecto al primer inciso del art. 153.1 del Código penal en la redacción dada al mismo por el art. 37 de la LOMPIVG. La duda central de la Magistrada cuestionante se refería a la existencia de un tratamiento punitivo diferente de la misma conducta en función del sexo de los sujetos activo y pasivo, que sería por ello contrario al art. 14 CE.

**Para consultar**

Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2008, de 3 de julio, así como a sus votos particulares.

Fuente: [Tribunal Constitucional](#)

Por otra parte, el Juzgado Penal 2 de Albacete también planteó cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 172.2 del Código penal (coacciones leves), en su vigente redacción, dada por el art. 39 de la LOMPIVG. En respuesta, se dictó la **Sentencia del Tribunal Constitucional 127/2009, de 26 de mayo**, que también declara la constitucionalidad, recogiendo argumentos anteriores.

**Para consultar**

Sentencia del Tribunal Constitucional 127/2009, de 26 de mayo, así como a sus votos particulares.

Fuente: [Tribunal Constitucional](#)

Por último, también se plantearon varias cuestiones de inconstitucionalidad sobre el artículo 57.2 del Código Penal que obligaba al juzgado a imponer "en todo caso" la prohibición de acercamiento del condenado a las personas que han sido víctimas de su agresión -su madre y su hermano- y los artículos de la Constitución que reconocen la libertad de las personas. El Juzgado destacaba «la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico», lo que «implica sostener que cada persona puede y debe trazar por sí misma su propio proyecto vital sin que el Estado deba interferirse».

Incluso, se planteó por esta cuestión una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de la Audiencia de Tarragona, que fue resuelta en noviembre de 2011. El Tribunal de la UE sentenció que las decisiones judiciales pueden imponerse en contra de la voluntad de las víctimas, argumentando que "*la protección penal contra los actos de violencia domestica que establece un estado miembro*" además de proteger a las víctimas busca proteger también "*otros intereses generales de la sociedad*".

Frente a esto, el Tribunal Constitucional ha dictado **Sentencia 60/2010, de 7 de octubre** en la que por unanimidad avala la constitucionalidad de la norma, entendiendo que la orden de alejamiento no restringe el derecho de la víctima sino del autor de un delito, aunque reconoce que cualquier condena puede repercutir sobre terceros. Para el Constitucional, esa argumentación descansa en una comprensión "errónea" de los fines de la norma, que es "un medio adecuado para proteger los bienes jurídico-constitucionales tutelados" -esto es, la vida, la integridad física, la indemnidad sexual, etc.- "mediante la evitación de futuros ataques". La prohibición de aproximación entre agresor y víctima, que puede ser graduada por el juez en

función de las circunstancias del caso, "puede contribuir razonablemente a la realización de ese fin", dice el tribunal. La sentencia señala que "no puede dejar de resaltarse la extraordinaria relevancia constitucional de los bienes que el legislador pretende proteger" mediante el alejamiento obligatorio del autor de agresiones "que razonablemente le merecen un especial desvalor".

**Para consultar**

Sentencia del Tribunal Constitucional 60/2010, de 7 de octubre, así como a sus votos particulares.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

En el mismo sentido y sobre la obligatoriedad de la pena accesoria de alejamiento, se dictaron después, recogiendo la misma argumentación, las **Sentencias 86/2010, de 3 de noviembre de 2010 y Sentencia 84/2010, de 3 de noviembre de 2010.**

**Para consultar**

Artículo doctrinal sobre la constitucionalidad de la reforma, escrito por la profesora de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Ana I. Pérez Machío, 2010.

Fuente: [Universidad de Santiago de Compostela](#)

7. REFORMAS OPERADAS EN EL ORDEN PROCESAL: LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER: NATURALEZA, ÁMBITO, COMPETENCIAS PENALES Y CIVILES, EQUIPOS PSICOSOCIALES

"El reto más importante es la erradicación del terrorismo de género. Terrorismo que no ofrece tregua. La Ley Integral ha dado un paso importante en esta lucha y el desarrollo de sus preceptos, en la forma declarada en su Preámbulo, marca el camino a seguir. Ir disminuyendo de forma progresiva y sin descanso la violencia de género es tarea de todos. Sólo con la implicación de la sociedad, con el reconocimiento del problema y con el trabajo especializado en todos los sectores se podrá ir alcanzando".

(Francisca Verdejo, Magistrada-Jueza Titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona).

Para poner en práctica...



¿Sabes desde qué año existen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer?



¿Y conoces en qué tipo de procesos intervienen? ¿Y cómo funcionan?

7.1. CREACIÓN DE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y COMPETENCIA

En el Título V (arts. 43 a 72), bajo la rúbrica "Tutela Judicial", de la Ley Integral, se abordan una serie de modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), la LECRim, la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, a fin de *"garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de la violencia de género en las relaciones intrafamiliares"*.

Sin duda, la mayor innovación, en el ámbito procesal, de esta Ley, consiste en la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. No se trata de un nuevo orden jurisdiccional, sino de una especialización dentro del orden jurisdiccional penal.

Así, mediante la modificación del art. 87 bis de la LOPJ se establece que en cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia contra la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. No obstante, excepcionalmente, podrán establecerse Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia (art. 44 de la Ley). Respecto de estos Juzgados, la Ley prevé que en algunos casos sean de competencia exclusiva (por nueva creación o por transformación) y en otros compatible (con otras tareas).

7.1.1.COMPETENCIAS EN EL ORDEN PENAL

- Para la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su cónyuge, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los/as menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
- Para la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando

la víctima sea alguna de las personas señaladas anteriormente.

- Para la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez/a de Instrucción de Guardia, pues hay partidos judiciales en los que, por la necesidad de una respuesta inmediata, la orden es resuelta por el de Instrucción de Guardia, que luego se inhiba al de Violencia para que siga a cargo de la investigación.
- Para el conocimiento y fallo de las faltas contra las personas y contra el patrimonio (arts. 617 a 628 del CP), cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas anteriormente, puesto que en estos casos, no debe realizarse apenas actividad instructora y el enjuiciamiento lo lleva a cabo el mismo Juzgado que recibe la causa.

7.1.2.COMPETENCIAS EN EL ORDEN CIVIL

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán competencia sobre los siguientes asuntos, que constituyen una lista cerrada:

- Filiación, maternidad y paternidad.
- Nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
- Los asuntos que versen sobre relaciones paterno-filiales (por ejemplo sobre discrepancias en el ejercicio de la patria potestad).
- Los que versen sobre la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar (aquí podrían entrar reclamaciones en el marco de una pareja de hecho).
- Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
- Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción, y
- Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

Sin embargo, es preciso señalar que la competencia civil de estos Juzgados está condicionada a la concurrencia simultánea de los requisitos que a continuación se detallan, para que pueda atribuírseles el conocimiento de tales asuntos, de manera exclusiva y excluyente. Tales requisitos son los siguientes:

- Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género.
- Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
- Que se hayan iniciado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer o se haya adoptado una orden de protección en favor de una víctima de violencia de género.

El nuevo art. 87 ter de la LOPJ, termina con dos precisiones: la primera, que consiste en que cuando el Juez/a apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyan expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente; y la segunda, que en todos estos casos se prohíbe la mediación.

7.1.3.RECURSOS

Se adiciona un nuevo ordinal 4º al art. 82.1 y un nuevo párrafo al art. 82.4 de la LOPJ, a fin de atribuir a las Audiencias Provinciales el conocimiento de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia penal y civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.

Asimismo, se prevé la especialización de una o varias de las secciones de las Audiencias Provinciales, para el conocimiento de estos recursos y para

el enjuiciamiento en primera instancia de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. Esta previsión ya ha sido ejecutada, mediante el Acuerdo número 16 del Pleno del CGPJ, de 25 de mayo de 2005.

7.1.4.CITACIONES Y NOTIFICACIÓN DE SENTENCIAS

Se adicionan un nuevo art. 797 bis y un nuevo apartado 5 al art. 962 a la LECrim, en el sentido de que las citaciones en los juicios rápidos por delitos y por faltas serán efectuadas por la Policía Judicial a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de manera coordinada con los mismos. No obstante, si hubiere un detenido (en los juicios rápidos por delito), será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, cuando no sea posible la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente y cuando en ese partido judicial no exista un servicio de guardia entre los propios Juzgados de Violencia, opción que solo se da en aquellos en que existen cuatro o más exclusivos, lo que ocurre solo en las principales ciudades de España como Madrid o Barcelona y alguna otra.

Se adicionan un nuevo párrafo en el art. 160 y un apartado 5 en el art. 789 de la LECrim, disponiendo que las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal y otros Tribunales, sean remitidas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que efectuó la instrucción de la causa, con indicación de la firmeza o no de la misma.

7.1.5. PÉRDIDA DE COMPETENCIA OBJETIVA DE LOS TRIBUNALES CIVILES CUANDO SE PRODUZCAN ACTOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Se adiciona un nuevo art. 49 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil o LEC, que prevé diversos supuestos:

- Cuando un Juez/a civil que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil tenga noticia de la comisión de un acto de violencia de los previstos en el art. 1 de la Ley Integral de Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, una vez que verifique los presupuestos del art. 87 ter de la LOPJ, deberá inhibirse al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, salvo que se haya iniciado la fase de juicio oral civil, porque los principios rectores de la LEC (oralidad, concentración e inmediación), imponen que sea el mismo juez que está conociendo del juicio el que deba dictar sentencia.
- Cuando en el mismo supuesto anterior, no se haya iniciado un proceso penal, ni se haya dictado orden de protección, una vez verificados los requisitos del art. 87 ter de la LOPJ, el juez/a civil deberá citar inmediatamente a las partes a una comparecencia con intervención del Ministerio Fiscal que se celebrará en las 24 horas siguientes a fin de que éste tome conocimiento de los hechos acaecidos. Posteriormente, en el plazo de otras 24 horas, el Ministerio Fiscal, deberá decidir si presenta denuncia o solicita orden de protección, en ambos casos ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, y de hacerlo, deberá presentar copia ante el juez/a civil quien deberá continuar conociendo del asunto hasta que, en su caso, se le requiera de inhibición.
- Cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo de un asunto penal por violencia de género tenga conocimiento de un proceso civil, una vez verificada la concurrencia de los requisitos del art. 87 ter de la LOPJ, requerirá de inhibición al Tribunal Civil que la acordará de inmediato remitiéndole los autos.

En los casos de remisión de autos civiles por inhibición al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, éste ejercerá sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la LEC.

7.1.6. COMPETENCIA TERRITORIAL

Frente al criterio general en el orden judicial penal, que atribuye competencia para la instrucción de un hecho criminal al lugar de su comisión, la LOMPIVG adiciona un nuevo art. 15 bis en la LECrim y para estos delitos y faltas la atribuye al juzgado del lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección o medidas urgentes del art. 13 de la LECrim, que pudieran ser adoptadas por el juzgado del lugar de la comisión de los hechos. Este criterio pretende favorecer a la víctima.

7.1.7. COMPETENCIA POR CONEXIÓN

Se adiciona un nuevo art. 17 bis en la LECrim, de forma que la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas corresponderá a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, cuando la conexidad se deba a la comisión como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución, o para procurar la impunidad de otros delitos.

7.1.8. EQUIPOS TÉCNICOS O PSICOSOCIALES

Relacionado con el ámbito sanitario, la Disposición Adicional Segunda de la LOMPIVG señala que el Gobierno y las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de justicia, organizarán los servicios forenses de modo que cuenten con **Unidades de valoración forense integral** encargadas de diseñar protocolos y una actuación global e integral en casos de violencia de género. La idea era que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer contaran con equipos técnicos que pudieran realizar valoraciones psicosociales tanto en el proceso penal (valoración de riesgo, secuelas, historia de maltrato, etc) como en el civil (dictamen sobre las medidas más idóneas en cuanto a comunicaciones y visitas, etc).

En este ámbito de actuación se publicó la **Guía y el Manual de Valoración Integral Forense de la violencia de género y doméstica**, como suplemento al boletín de información número 2000 del Ministerio de Justicia, editada en noviembre de 2.005.

Las valoraciones integrales que prevé este protocolo determinan una actuación inicial por el/la médico/a forense sobre la valoración de lesiones físicas las personas agredidas en su caso, y aplica un cuestionario de detección de riesgos de las personas agredidas, y si es positivo, el/la médico/a forense comunica al juzgado la conveniencia de la intervención del resto los miembros del equipo, y que la investigación forense no se puede cumplimentar con rapidez porque requiere más tiempo para llevar a cabo un investigación más prolongada por el equipo de valoración integral que debería estar formado al menos por un/a médico/a forense, un/a psicólogo/a forense y un/a trabajador/a social forense.

El informe de toda la Unidad se hará de forma conjunta y con puesta en común tras una valoración por Ejes:

- Eje 1: sobre el "hecho": lesión física, psíquica, medios y formas de lesionar, consecuencias de las lesiones, ensañamiento, etc.
- Eje 2: "el clima violento": otros hechos agresivos lesivos, otras conductas violentas, datos periféricos de una historia de relación violenta....
- Eje 3: "riesgo de nuevas agresiones y de muerte homicida": dependencia emocional y creencias obsesivas, delirio celotípico, trastorno de control de impulsos, conductas preparatorias del "suicidio ampliado", etc.
- Eje 4: "medidas" aconsejadas para proteger y evitar,
- Eje 5: de "valoraciones específicas": agresión sexual en el entorno doméstico, personas especialmente vulnerables con dependencia o

discapacidad, etc.

- Eje 6: "casos de muerte": muerte por homicidio, suicidio inducido tras una historia de maltrato, suicidio ampliado, etc.



Para consultar

Estudio sobre la jurisprudencia dictada por las Audiencias Provinciales en materia de violencia de género en 2009, estudio publicado por el:

[Consejo General del Poder Judicial](#)



Para consultar

Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género, del CGPJ, de 16 de octubre de 2008, que contiene numerosas pautas tanto de tipo sustantivo como procesal para la aplicación de la reforma penal llevada a cabo por la LOMPIVG.

Fuente: [Poder Judicial](#)

7.1.9. TASAS JUDICIALES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Recientemente, se ha aprobado la *Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses*. La misma implanta tasas judiciales a la hora de interponer demandas, recursos y otras actuaciones en Tribunales. Sin embargo, sólo se impone en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Ello implica que los procesos penales no conllevan devengo de tasas judiciales.

Las víctimas de violencia de género sí pueden verse afectadas por la aplicación de tasas en los procesos civiles (ej: de separación o divorcio o medidas paternofiliales) y de ello se habla en el Módulo 3.

Actualmente, el Gobierno ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita y en dicho borrador se recoge lo siguiente (salvando así la omisión existente en la Ley 10/2012):

"2. Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las y los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fuera el agresor.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querrela, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justicia gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de los delitos a que se refiere este apartado y, en especial, en los de violencia de género, deberá ser el mismo Abogado el que asista a aquélla, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa."

8. INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

"La violencia contra las mujeres y las jóvenes es un problema universal que alcanza proporciones de pandemia".

(Declaración del Parlamento Europeo sobre la campaña "Di NO a la violencia contra las mujeres", de fecha 22 de abril de 2009).

Para poner en práctica...



¿Existen en España cuerpos policiales que actúen de forma específica contra la violencia de género?



¿Conoces las herramientas específicas de que se valen en su trabajo?

8.1. CUERPOS ESPECÍFICOS Y REGULACIÓN DE SU INTERVENCIÓN

Desde los años 80 se empezaron a crear dentro de los cuerpos policiales, algunos grupos especializados en la atención a mujeres (a veces, unido a la atención a menores) como los EMUMES de Guardia Civil (Equipos de Mujer y Menor) o los llamados SAM (Servicio de Atención a la Mujer) o SAF (Servicio de Atención a la Familia) de Policía Nacional.

Poco después de la aprobación de la Ley que regulaba la Orden de Protección en 2003, se elaboró el *Protocolo para la implantación de la Orden de Protección*, en 2004. Así mismo, existe un *Protocolo para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género*, aprobado el 10 de junio de 2004 y actualizado a los principios de la

LOMPIVG en junio de 2005. También se ha firmado un *Protocolo de actuación y coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Abogados y Abogadas ante la violencia de género regulada en la LOMPIVG*, para facilitar la asistencia letrada en 2007.

En cuanto a la regulación en la propia LOMPIVG, el artículo 31 determina que:

1. *El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas.*
2. *El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal.*
3. *La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica.*
4. *Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las Comunidades Autónomas que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana dentro del territorio autónomo, en los términos previstos en sus Estatutos, en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en sus leyes de policía, y todo ello con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las víctimas.*

Además, el 13 de marzo de 2006, el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, han firmado un *Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del*

Estado (FCSE) y los cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. El último Protocolo citado establece una serie de criterios generales de colaboración y coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Policías Locales, para garantizar el cumplimiento eficaz de las medidas judiciales de protección a las víctimas de este tipo de violencia, creándose mecanismos que permitan un rápido intercambio de información sobre estos delitos. El Protocolo fija a la Junta Local de Seguridad como marco competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en su ámbito territorial.

El último documento importante es la *Instrucción 10/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que aprueba el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer*, que entró en vigor el 23 de julio de 2007, y fue modificada por la *Instrucción 14/2007 de 10 de octubre y finalmente por la Instrucción Nº 5/2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 28 de julio*, que les atribuye la Valoración inicial del riesgo (VPR) y la Valoración policial de la Evolución del Riesgo (VPER).

Según esta Instrucción, siempre que se tenga conocimiento de un episodio de violencia de género, la actividad policial se dirigirá a determinar:

- a. Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima.
- b. Las relaciones mantenidas con el agresor.
- c. Los antecedentes del propio agresor y su entorno.
- d. Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y el agresor.
- e. La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la víctima al estatuto de protección concedido.

Esta información es imprescindible para poder concretar el nivel de riesgo de violencia y las medidas que hayan de adoptarse en cada caso para asegurar la protección.

La valoración de la situación de riesgo de violencia contra la mujer (Valoración Policial del Riesgo, VPR) y su evolución (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo, VPER), se realizará empleando las herramientas y formularios normalizados aprobados al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad, y disponibles en el "Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género", al que los/as funcionarios/as actuantes pueden acceder a través de la INTRANET corporativa del Cuerpo de Seguridad correspondiente.

En el momento de recoger una denuncia por violencia de género, el/la agente vendrá obligado a realizar una "valoración inicial del riesgo", que tendrá que ser revisada al cabo de un tiempo (la frecuencia viene determinada por el propio Protocolo, variando según el grado de riesgo inicial apreciado) o cuando haya cambio de circunstancias. La valoración puede arrojar estos resultados:

- NO APRECIADO.
- BAJO.
- MEDIO.
- ALTO.
- EXTREMO.

Cada uno de ellos, según el Protocolo conllevará la aplicación de un catálogo determinado de medidas policiales. Con resultado medio a extremo, hay obligación de informar a la víctima de ello. La evaluación del riesgo se hará en el Nivel extremo, cada setenta y dos horas; en el Nivel alto cada siete días; en el Nivel medio, cada treinta días y en el Nivel bajo, cada sesenta días. Siempre, las valoraciones se notificarán a la Fiscalía y el Juzgado competente.

Estas son las medidas unidas a cada valoración:

a) Nivel de riesgo NO APRECIADO

Las mismas medidas, de tipo operativo y asistencial, que para cualquier otro/a ciudadano/a denunciante. Especialmente, información de derechos y de recursos que tiene a su disposición.

b) Nivel de riesgo BAJO

a) Obligatorias:

- Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente (24 horas) con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximas.
- Contactos telefónicos esporádicos con la víctima.
- Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de protección.
- Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes.
- Información precisa sobre el servicio de tele asistencia móvil.

b) Complementarias:

- Contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima (acordar con ella la conveniencia de emplear o no uniforme y/o vehículos con distintivos).
- Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y del agresor, que llevará el personal de patrulla.
- Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio, si la Autoridad Judicial acuerda su salida del mismo.

c) Nivel de riesgo MEDIO

a) Obligatorias:

- Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en entrada/salida centros escolares de los hijos/as.
- Acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial,

asistencial o administrativo, cuando se considere que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima.

- Procurar que se facilite a la víctima un terminal móvil (servicio teleasistencia).
- Entrevista personal con la víctima por el responsable de su protección.

b) Complementarias:

- Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales de protección.
- Entrevista con personal de Servicios Asistenciales que atienden a la víctima / Puntos de Atención Municipal, para identificar otros modos efectivos de protección.
- Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida.

d) Nivel de riesgo ALTO

a) Obligatorias:

- Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en entrada/salida centros escolares de los hijos/as.
- Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de acogida o al domicilio de un familiar durante los primeros días, especialmente si no se ha procedido a la detención del autor.
- Control esporádico de los movimientos del agresor.

b) Complementarias:

- Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima: vecindario, familia, trabajo, lugares de ocio,...
- Procurar que se faciliten dispositivos electrónicos para la vigilancia del agresor.

e) Nivel de riesgo EXTREMO

a) Obligatorias:

- Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una amenaza inminente.
- Control intensivo de los movimientos del agresor, hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima.
- En su caso, vigilancia en entrada/salida centros escolares de los hijos o hijas.



Para consultar

Acceder a la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 28 de julio.

Fuente: [Plataforma Isonomia](#)

Los protocolos proporcionan guías para la intervención policial en sus distintas fases de investigación, recogida de denuncia y confección del atestado y actuación en el control y seguimiento de las medidas judiciales de protección o aseguramiento, y cumplimiento de éstas.

El último Protocolo dictado en materia de actuación de Fuerzas de Seguridad es el *Protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de Violencia de Género, de 8 de julio de 2009*.



Para consultar

Protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de Violencia de Género, de 8 de julio de 2009.

Fuente: [Poder Judicial](#)


9. RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente".

(Virginia Woolf, escritora y pensadora feminista).

Para poner en práctica...

 ¿Conoces teléfonos de apoyo a las mujeres que sufren violencia?

 ¿Sabes si hay mecanismos electrónicos que ayuden a su protección?

 ¿Conoces si cuentan con alguna ayuda específica de cara al empleo?

9.1. RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONTROL TELEMÁTICO

9.1.1. SERVICIO ESTATAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE INTERNET

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad tiene en marcha una **Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género (W.R.A.P)** que permite la localización sobre mapas activos de los distintos recursos (policiales, judiciales y de información, atención y asesoramiento) que las administraciones públicas y las entidades sociales han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de violencia de género:

Fuente: [WRAP Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

9.1.2. TELÉFONO 016

En cumplimiento del ya mencionado Catálogo de Medidas Urgentes en materia de violencia de género (diciembre de 2006), la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer ha puesto en marcha el servicio telefónico gratuito 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. Los servicios que ofrece son los siguientes:

- Atención gratuita y profesional
- Atención las 24 horas del día los 365 días del año
- Atención a consultas procedentes de todo el territorio
- Derivación de llamadas de emergencia al 112
- Coordinación de servicios similares de las Comunidades Autónomas
- Información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno sobre qué hacer en caso de maltrato
- Información sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de este tipo de violencia
- Asesoramiento jurídico
- Atención en 51 idiomas.

Además, el teléfono 900 116 016 es específico para personas con discapacidad auditiva y/ o del habla.

Muchas Comunidades Autónomas disponen de sus propios servicios de atención telefónica. Para acceder a los mismos, vienen recogidos en la página del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

[Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

y

[Teléfonos información Comunidades Autonomas](#)

9.1.3. SERVICIOS DE TELEASISTENCIA

Se puede hablar de dos diferentes mecanismos para garantizar por medios telemáticos la protección de la víctima:

- **Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO)**

Ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.

El servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización. Al dotar a las mujeres de un teléfono móvil con GPS, permite que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del Centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.

Para la puesta marcha de este servicio el antiguo Ministerio de Igualdad, titular del servicio ATENPRO, firmó un Convenio de Colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del programa.

Podrán solicitar el servicio las víctimas de la violencia de género que cumplan los siguientes requisitos:

- No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.
- Que cuenten con orden de protección o medida de alejamiento vigente, siempre que la autoridad judicial que la emitió no considere

contraproducente este servicio para la seguridad de la usuaria (aunque a veces, con informes técnicos es posible su concesión aunque no se cumpla este requisito).

- Participar en los programas de atención especializada para víctimas de la violencia de género existentes en su territorio autonómico.

Normalmente, se gestiona a través de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, en algunas zonas de España en coordinación con Cruz Roja o en otras, directamente con Policía Nacional.



Para consultar

Protocolo de actuación del Servicio Telefónico de Atención y Protección a Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO).

Fuente: [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

- **Dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores, denominados coloquialmente "brazaletes del maltratador"**

Desde la LOMPIVG, es posible que el Juzgado apruebe la utilización de un dispositivo tecnológico para el seguimiento de una medida de alejamiento. El aparato cuenta tanto con una pulsera para el agresor como con un receptor para la víctima. Hay brazaletes distribuidos por el Ministerio de Igualdad y otras por Comunidades Autónomas, aunque es un recurso muy escaso por su alto coste y limitado a las situaciones que sean valoradas como las de violencia y riesgo más alto.

En el epígrafe 8, correspondiente a las Fuerzas de Seguridad, ya se ha hecho mención al Protocolo de seguimiento de medidas telemáticas, en que aborda su funcionamiento.

9.2. RECURSOS DE VIVIENDA

9.2.1. RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL

En la mayoría de las Comunidades Autónomas, existen tres tipos de Centros (algunos de gestión pública y la mayoría, gestionados por asociaciones privadas, a través de conciertos o subvenciones de organismos públicos), que proporcionan alojamiento a la mujer cuando sufre una situación de violencia que le hace tener que dejar su hogar, por ser la situación insostenible o de alto riesgo. El acceso a los mismos será por derivación desde policía, o desde recursos especializados de atención o desde Servicios Sociales. Algunas Comunidades condicionan el acceso a haber presentado denuncia penal. Son:

- **Centros de emergencia:** es un recurso de acogida inmediata, que funciona las 24 horas, destinado a proporcionar un alojamiento seguro e inmediato, así como manutención y otros gastos a las mujeres víctimas de violencia de género y a los/as menores a su cargo. Suelen estar previsto para una estancia corta (entre unos días y unos dos meses). Sirven para apoyar en los primeros momentos de toma de decisión.
- **Centros de acogida:** en este recurso, se ofrece alojamiento seguro, manutención y otros gastos a mujeres y personas a su cargo, por el tiempo necesario para su recuperación, que suele ser de unos doce meses. Suelen ofrecer a las mujeres y personas a su cargo un tratamiento integral de recuperación desde los ámbitos psicológico, educativo, sociolaboral y jurídico, que favorezca la normalización de la unidad familiar y la superación de los efectos de la violencia.
- **Pisos tutelados:** ofrecen alojamiento y seguimiento psicosocial a las mujeres y personas a su cargo que hayan acabado el proceso en un centro de acogida, pero aún necesitan ayuda para alcanzar su autonomía, por un tiempo máximo de dieciocho meses. Los suelen

ocupar entre una o dos familias.

También suelen existir dispositivos residenciales seguros y programas específicos para conseguir la autonomía personal para las mujeres que pretendan abandonar redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual.

9.2.2. ACCESO PRIORITARIO A VIVIENDAS

En este sentido, la LOMPIVG estatal en el artículo 28 establece que las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas "colectivos prioritarios" en el acceso tanto a viviendas protegidas, como a residencias públicas para mayores. Este punto tiene desarrollo en la legislación específica de vivienda, así como mediante convenios entre Administraciones.

Tanto el **Plan Estatal de vivienda que hubo en el 2005-2008** como el nuevo **Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009- 2012**, incluyen a las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo prioritario para el acceso a viviendas y a las ayudas financieras para su adquisición. También la condición de víctima de violencia de género es una circunstancia que será tenida en cuenta para la concesión de una plaza en una residencia pública para mayores.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, suele ser habitual la reserva de un cupo de viviendas en cada promoción de viviendas de promoción pública para situaciones de especial necesidad, cuya solicitud se podrá presentar en cualquier momento.

9.3. RECURSOS EN MATERIA DE EMPLEO

9.3.1. RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN O RAI

Las directrices sobre empleo de la Unión europea obligaban a la adopción de determinadas medidas de inserción laboral especialmente de personas con mayores dificultades. Por ello, en 2003 se estableció un programa para ese año por el que se concede una renta activa de inserción a las personas desempleadas que suscribieran un compromiso de actividad. Uno de los colectivos de especial dificultad que contemplaba era el de las en ese momento llamadas "víctimas de violencia doméstica" (empleando así mismo la misma terminología que en la legislación que aprobó la orden de protección). Años más tarde, se ha ido manteniendo su regulación, aunque la misma ahora alude tanto a víctimas de violencia de género como de violencia doméstica. Actualmente viene regulada en el *Real Decreto 1369/2006 de 24 de noviembre*, ya con carácter permanente.

De acuerdo con este último Decreto, para acceder a este programa es necesario que estas mujeres reúnan diversos requisitos:

- Tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia de género (entendida según la descripción actual de la Ley Integral y acreditada por certificación de servicios sociales o piso de acogida o por resolución judicial, u orden de protección judicial. Se considera no cumplido si hay convivencia con el agresor). También para víctimas de violencia doméstica, pero solo para los casos en que se reciba por parte del cónyuge o análogo, o de padres o hijos/as.
- Tener menos de 65 años.
- Estar en desempleo e inscrita como demandante de empleo (para ello se requiere ser española o extranjera con permiso de residencia), sin exigirse antigüedad.
- No tener derecho a prestaciones o subsidios de desempleo o a la renta agraria.
- Carecer de rentas de cualquier naturaleza, superiores, en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. A estos efectos, se

computan las rentas de la unidad familiar, esto es, se incluyen las de hijos menores de 26 años o incapacitados o menores acogidos, pero no las del agresor.

Además, se exige a estas mujeres que suscriban un compromiso de actividad y pedir la incorporación al programa de Renta Activa de Inserción, por el que realizarán las actuaciones que les indique el Servicio Público de Empleo en el Plan Personal de Inserción Laboral. El Real Decreto regula también las diversas obligaciones para estas mujeres (por ejemplo, acudir a las ofertas de empleo, etc.), así como las acciones que comprenderá el plan, los supuestos de baja y las incompatibilidades.

El Real Decreto regula su compatibilidad con el trabajo, con determinados requisitos. Su cuantía es del 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM para 2012: 532,51 euros mensuales), durante once meses improrrogables, por lo que la cuantía actual de la RAI es de 426 euros mensuales.

Además, dentro del programa de Renta Activa de Inserción existen otras medidas complementarias del pago mensual ya descrito:

- La ayuda para incentivar el trabajo, consistente en el 25% de la renta durante un máximo de 180 días desde el inicio del trabajo.
- La ayuda específica para mujeres víctimas de violencia de género por cambio de residencia consistente en un pago único de tres mensualidades de RAI, con el único requisito de acreditar haber cambiado su residencia o dentro del plazo de doce meses antes de ingresar en el programa o durante su permanencia en éste.

En el ámbito autonómico, muchas Comunidades han adoptado medidas específicas para apoyar la inserción sociolaboral de las mujeres que han sido víctimas de malos tratos, por ejemplo a través de subvenciones a las empresas que las contraten.

**Para consultar**

Real Decreto 1369/2006 de 24 de noviembre por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

La *Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral* ha operado alguna reforma en la RAI, imponiendo algunos requisitos a sus perceptores/as, relativa a la posibilidad de perder la RAI si durante un tiempo se sale de España. Sin embargo, este requisito no es exigido a las víctimas de violencia de género.

9.3.2. PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la LOMPIVG, se elaboró el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

El Programa comprende bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que contraten mujeres víctimas de violencia de género, incentivos para el empleo autónomo, incentivos para facilitar la movilidad geográfica de algunas mujeres, fomento de convenios para la contratación con empresas, etc.

También en el ámbito autonómico e incluso municipal se están aprobando medidas similares en materia de empleo. Así mismo, en algunas Comunidades (como en Madrid), se han abierto oficinas de empleo con atención específica para mujeres víctimas de malos tratos.

**Para consultar**

Real Decreto 1917/2008 de 21 de noviembre por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

9.4. PRESTACIONES ECONÓMICAS

9.4.1. LEY 35/1995, DE 11 DE DICIEMBRE, DE AYUDA Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Con carácter general y no específico para situaciones de violencia de género, existe la *Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual*. Esta Ley es de aplicación a pocas víctimas de violencia de género en el ámbito doméstico: sólo a aquellas en las que los resultados del delito hayan sido de muerte, lesiones corporales serias o graves daños en la salud física y mental, excepto a las víctimas de delitos sexuales, a las que siempre se cubre, aunque el delito haya sido cometido sin violencia. La Ley contempla distintos tipos de ayudas como a los beneficiarios/as en caso de muerte de la víctima, o por incapacidad temporal o para tratamiento terapéutico (esto sólo para víctimas de delitos sexuales).

9.4.2. AYUDA DEL ARTÍCULO 27 DE LA LOMPIVG

De manera específica, la LOMPIVG prevé en su artículo 27 una **ayuda de pago único**, para víctimas con especial dificultad para el empleo por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y con escasos recursos económicos. La cuantía es equivalente a seis meses de subsidio de desempleo salvo algunas excepciones en que se aumentará. Viene desarrollado en el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre.

**Para consultar**

Real Decreto 1452/2005 de 2 de diciembre por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la LOMPIVG.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

Por su parte, las distintas Comunidades Autónomas han dictado normas reglamentarias de desarrollo de esta ayuda, normalmente mediante Orden de la Consejería correspondiente.

Los requisitos para acceder a la ayuda son los siguientes:

1. No haber sido beneficiaria anterior de esta misma ayuda, aun en el caso de que la solicitante pudiera aportar nueva acreditación de una situación de Violencia de Género.
2. Tener vigente el título que acredita la situación de Violencia de Género, tanto en el momento de la presentación de la solicitud como al serle concedida la ayuda.
3. Ser residente en cualquier municipio de la comunidad de Madrid.
4. Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
5. Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a través de Informe del Servicio Público de Empleo.

9.5. OTROS RECURSOS

Las diferentes Comunidades Autónomas han estructurado distintos recursos y servicios de atención a las víctimas de violencia de género, con el fin de garantizarles atención psicológica y social.

Por otra parte, la LOMPIVG también busca garantizarles una atención sanitaria específica y, para ello y por previsión expresa en el artículo 16, desde 2007 se cuenta con un *Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género* que prevé pautas para la atención primaria, la atención en urgencias, la atención ante agresiones sexuales, una guía de recursos, consideraciones éticas y legales, actuación con el maltratador y modelos de informes y partes. Además, varias CCAA (como la de Madrid) han elaborado Guías similares.

**Para consultar**

Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género.

Fuente: [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

En 2012 se ha aprobado un nuevo *Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género*.

**Para consultar**

Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. 2012.

Fuente: [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

Por último, en materia de información y asesoramiento, cabe destacar que existen numerosas asociaciones que efectúan atención directa de tipo general, jurídica, psicológica, social, etc. en la materia, además de los recursos públicos.

Por otra parte y con base en el artículo 20 de la LOMPIVG, que garantiza el derecho a la asistencia jurídica de las mujeres víctimas de violencia de género, en casi todas las Comunidades Autónomas, se han suscrito convenios entre el Colegio de Abogados y también la Administración Central para implantar un **Turno de oficio especializado en violencia**, con servicio de guardia de 24 horas. Normalmente, para solicitarlo, hay que dirigirse a las

oficinas de Atención a víctimas o a la Guardia Civil, comisaría o Juzgado donde se ponga la denuncia.

Por último, hay diversas **Oficinas Judiciales de Atención a las Víctimas**, unas gestionadas por el Ministerio de Justicia, en las diversas Comunidades Autónomas, y otras por las propias Comunidades Autónomas. En general, cuentan con una finalidad asistencial, de atención psicológica y social, así como con misión informativa.

9.6. RECURSOS DE ORGANISMOS DE IGUALDAD Y AUTONÓMICOS


En cada Comunidad Autónoma, existe una estructura determinada de recursos para la atención de víctimas de violencia de género (normalmente definida en su propia normativa, que se recogerá en el epígrafe 11). Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a través de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, así como en la Red de Centros y Servicios.


10. DIFICULTADES PROCESALES RELACIONADAS CON LA VÍCTIMA Y CON LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

"Necesitamos hombres que quieran vivir con una mujer libre, que no teman el poder femenino, y hay pocos".

(Miguel Ángel Arconada, profesor de Secundaria y fundador de "Codo a codo, grupo de hombres por la igualdad" (Palencia, España).

Para poner en práctica...

 ¿Sabes si es posible retirar una denuncia por violencia de género? ¿Y una orden de protección?

 ¿Conoces las consecuencias de incumplir una orden de alejamiento?

10.1. RETIRADA DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN

Como ya se ha expuesto, casi todas las conductas relacionadas con la violencia de género constituyen un delito público o semipúblico, por lo que, una vez que son denunciados o su comisión es puesta en conocimiento de las autoridades, el proceso penal sigue adelante más allá de la voluntad de la víctima. Eso implica que técnicamente no es posible "retirar la denuncia".

Una cuestión diferente es "retirar una orden de protección". En ese sentido, al ser la orden de protección una medida cautelar cuya adopción se tome mientras está un proceso penal en curso y a la vista de ciertas circunstancias, es posible que el órgano judicial pueda dejarla sin efecto (dictando un nuevo Auto). En ese sentido, si el Juzgado valora que ha cesado el riesgo, podría dejarla sin efecto aunque aún el proceso estuviera abierto.

Sin embargo, puede ocurrir que, aunque la propia víctima trate de solicitar al Juzgado la retirada de la orden (cosa que ocurre cuando, por ejemplo y a menudo por la dinámica del ciclo de la violencia que ya se ha explicado anteriormente, desea perdonar al agresor y volver a convivir con él), éste no lo haga por entender que la mujer sigue corriendo un riesgo y preferir que la medida cautelar se mantenga hasta que se celebre juicio y se dicte una sentencia firme sobre el asunto.

Una conducta de la víctima que procesalmente se interpreta como una "retirada" del procedimiento tiene lugar cuando da instrucciones a su letrado/a para que deje de ejercer la acusación particular (algo que podría ocurrir incluso en el mismo día del juicio), supuesto en el que la acusación pública, ejercida por el Ministerio Fiscal, será la única en seguir actuando en el proceso.

10.2. NEGATIVA DE LA VÍCTIMA A DECLARAR

Pese a lo dicho anteriormente, la conducta de la víctima sí puede influir en el resultado del proceso, especialmente cuando la prueba capaz de desvirtuar la presunción de inocencia del acusado depende casi totalmente o del todo de su declaración.

En estos casos, resulta un problema el que la víctima se acoja a su derecho a no declarar. Efectivamente, hay otra realidad a tener en cuenta y es que aun cuando la mujer sea capaz de denunciar al agresor, buscando principalmente protección, posteriormente puede tomar conciencia de que ha denunciado a su pareja o a su cónyuge, con quien ha convivido o convive y al que le unen lazos familiares, económicos o incluso posiblemente administrativos (por ejemplo, mujer extranjera reagrupada por su maltratador), a tal punto que, tras ese primer impulso, decida retirar la denuncia o, en su defecto, no declarar en contra de su agresor, amparándose en el derecho a la dispensa que le ofrece el artículo 416 de la LECrim (ante

el/la Juez de Instrucción) y el art. 707 de la LECrim (en la vista oral).

Nótese que el artículo 416 de la LECrim establece que:

“Están dispensados de la obligación de declarar, conforme al artículo 416 de la LECrim:

1. Los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, su cónyuge, o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a los que se refiere el número 3º del art. 261. (...)

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiere confiado en su calidad de defensor (...).”

Esta dispensa de la obligación de declarar, tal y como se apunta en la sentencia del Tribunal Supremo, núm. 134/2007 de fecha 22 de febrero y otras como la de 26 de marzo de 2009, se justifica en los vínculos de solidaridad que existen entre los integrantes de un mismo círculo familiar, incluido los miembros de la pareja de hecho: *«La excepción o dispensa de declarar al pariente del procesado o al cónyuge que establece este artículo, tiene por finalidad resolver el conflicto que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado. Esta colisión se resuelve con la dispensa de declarar, que es igualmente válida para el testigo en quien concurre la condición de víctima del delito del que se imputa al inculcado»(sic).*

Se trata de un derecho renunciable en cualquiera de las fases en las que deba informarse a la testigo-víctima: fase policial, de instrucción judicial o en el acto del juicio oral.

Así, en fase policial, cuando la mujer acuda espontánea y voluntariamente a denunciar a su agresor, no será necesario recordarle a la víctima su derecho a la dispensa legal del deber de declarar aunque el agresor

sea su cónyuge o pareja (sentencia del Tribunal Supremo nº625/2007, de 12 de julio entre otras).

Sin embargo, en la fase de instrucción, la testigo víctima deberá ser advertida por el/la Juez instructor/a de que no tiene obligación de declarar en contra del procesado, debiéndose consignar la contestación de la mujer a dicha advertencia. La no observancia de lo previsto en el artículo 416 y en el acto del juicio del artículo 710 de la LECrim determinaría la nulidad de la diligencia y de la prueba por vulneración de lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPJ, aunque la doctrina jurisprudencial considera que hay supuestos en los que la falta de advertencia podrá no generar una prohibición de la valoración de la prueba.

Ahora bien, si la testigo-víctima optase por declarar quedará sometida al régimen general de los testigos, a tal punto que las "manifestaciones oportunas" habrán de efectuarse previo juramento o promesa de decir la verdad y bajo apercibimiento de incurrir, en caso contrario, en un delito de falso testimonio.

Respecto a la fase de enjuiciamiento, la jurisprudencia viene distinguiendo diferentes supuestos en los que la víctima puede acogerse a esta dispensa según se mantenga o no la situación de convivencia y/o afectividad, aunque no son criterios uniformes. Así, los criterios jurisprudenciales recogidos en las sentencias más recientes son:

- Existencia de relación de afectividad conyugal o análoga a la matrimonial en el momento de prestarse la declaración en el acto del juicio oral. Ello es así porque en esas condiciones sí que se produce la colisión entre el deber de declarar y las consecuencias de los vínculos familiares y de solidaridad que unen al testigo con el acusado. En esta línea se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo nº 164/2008, de 8 de abril y 13/2009, de 20 de enero).
- Existencia de convivencia, cuando se haga uso del citado precepto

(sentencia del TS de 13 de febrero de 2008).

- El criterio es matizado posteriormente por el TS en la sentencia nº 292/2009, de 26 de marzo de 2009, Ponente Luciano Varela Castro. Esta resolución concluye en el sentido de que no se pueden establecer criterios apriorísticos y que habrá que estar a las circunstancias concretas del caso a la hora de decidir si el testigo, que en el momento de declarar ya no guarda la relación del art. 416 con el procesado, puede acogerse o no a la dispensa. Y será el fundamento de la dispensa lo que determine la solución: los vínculos de solidaridad entre el testigo y el imputado, acorde a la protección de las relaciones familiares dispensada en el artículo 39 de la Constitución, o el derecho a proteger la intimidad del ámbito familiar, o asimilado, con invocación del artículo 18 de la Constitución.
- Posteriormente se modifica de nuevo el criterio y el TS en su sentencia número 17/2010, de 26-1-2010 se alinea en la interpretación mayoritaria, según la cual no procede la dispensa cuando se ha roto la relación de parentesco.
- El último criterio es el de la STS de fecha 14 de mayo de 2010 que apunta, con cita de la sentencia de 26 de marzo de 2009, que no es preciso analizar la convivencia o la subsistencia de lazos de afectividad al momento del juicio para vincular a ésta el derecho a no declarar.

Por ello, la doctrina mayoritaria entiende que resulta fundamental que el Órgano judicial indague, en el acto del juicio, respecto a las circunstancias personales de la testigo víctima en el momento de la celebración de la vista, al objeto de acordar si procede o no dispensar a la víctima de declarar contra el procesado.

Una vez informada sobre la posibilidad de acogerse a la dispensa de la obligación de declarar, las posibles actitudes que podrá adoptar la mujer víctima de violencia de género en el acto del juicio oral, son las que a continuación se exponen:

- **Testigo-víctima que declara en fase de instrucción pero se acoge a la dispensa en el acto del juicio oral.**

Cuando la testigo-víctima se abstenga de declarar en el acto del juicio oral y mantenga aún la relación matrimonial o análoga de afectividad, la jurisprudencia mayoritaria viene acordando que la declaración testifical prestada en el sumario no podrá incorporarse a la actividad probatoria del juicio oral. Eso es así porque el artículo 730 de la LECrim. sólo será de aplicación cuando la diligencia de la que se trate sea irreproducible en el juicio oral, bien por razones congénitas- por ejemplo, la inspección ocular practicada durante el sumario- o bien por causas sobrevenidas que imposibiliten la práctica en ese momento procesal -supuesto de testigos desaparecidos, fallecidos, o imposibilitados sobrevenidamente para acudir al acto del juicio- (sentencia del TS de 27 de enero de 2009, Sala de lo Penal, Sección 1ª Ponente: Prego de Oliver Tolivar, entre las más recientes).

- **La testigo-víctima presta en el juicio oral una versión diferente a la realizada en la fase de instrucción, o se retracta de lo declarado con anterioridad.**

Cuando la testigo en el acto del juicio oral se contradiga con la declaración prestada en fase de instrucción y sus explicaciones no sean convincentes, la Ley permite, conforme al artículo 714 de la LECrim, la lectura de la declaración sumarial. Así, el testimonio de la testigo podrá ser sometido a debate/contradicción y a que se pidan explicaciones sobre el cambio apreciado, con el fin de que el Tribunal valore la credibilidad de la retractación que se hubiere producido.



Para consultar

De lo expuesto, se deduce que la utilización de la dispensa puede convertirse en un nuevo instrumento de dominación al servicio del violento, como apunta el *Informe del Grupo de Expertos/as en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ acerca de los*

problemas técnicos detectados en la aplicación de la LOMPIVG y en la de la normativa procesal, sustantiva u orgánica relacionada, y sugerencias de reforma legislativa que los abordan, de 11 de enero de 2011, en un doble aspecto y que a continuación transcribimos:

"En primer lugar, estableciendo que dicha dispensa no resultará de aplicación a los testigos que sean víctimas y/o perjudicados por el delito que se persiga.

De prosperar la reforma, las disfunciones derivadas de la posibilidad de que la víctima, decida, en su caso, a exonerar a su agresor, optará por mentir para no declarar en su contra, con la posible consecuencia de que pudiera perseguírsele por un delito de falso testimonio, justifica la propuesta complementaria relativa a excluir a dichos testigos, cuando declaren a favor del acusado en el acto del juicio oral, retractándose de las declaraciones que hubieren efectuado durante la instrucción de la posibilidad de ser perseguidos como autores de un delito de falso testimonio, por las manifestaciones que hicieren en este último acto plenario.

Como propuesta alternativa, y caso de no prosperar la modificación anterior, debería contemplarse, expresamente, en la legislación procesal la posibilidad de introducir, mediante su lectura, la declaración que prestase, durante la instrucción de la causa, la víctima o perjudicado de un delito, que, cuando es llamado como testigo al juicio oral, decide acogerse, en este momento, a la dispensa de prestar declaración del referido artículo 416.1, también prevista en el artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta alternativa permitiría valorar la declaración inicial como medio de prueba, con el alcance y virtualidad que resulte procedente en cada caso, en función de su contenido y el resto de las pruebas practicadas.

A tal efecto, se propone la introducción de un artículo 730 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establezca que:

Podrán leerse, también, a instancia de cualquiera de las partes, en el juicio oral, las declaraciones que hubiesen efectuado, en la instrucción de la causa, los testigos víctimas o perjudicados por el delito, que se acogieren en dicho acto a la dispensa de prestar declaración que se establece en el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" (sic).

Fuente: [Poder Judicial](#)

Respecto al valor probatorio de la declaración de la víctima, podemos citar la doctrina del Tribunal Supremo, entre ellas la *sentencia nº 725/2007, de 13 de septiembre*, considera que la declaración de la víctima tiene valor inculpatario aun cuando sea la única prueba de la que intente valerse la

acusación, ya que " *nadie debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado, so pena de propiciar situaciones de incuestionable impunidad*"(sic), por lo que la sola declaración de la víctima tiene aptitud para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia (SSTS 434/99, 486/99, 862/2000, 104/2002, 470/2003, 593/2006, entre otras; así como del Tribunal Constitucional, SSTC 201/89, 160/90, 229/91, 64/94, 16/2000, entre otras muchas).

Los requisitos que se vienen exigiendo para otorgar valor probatorio a la declaración de la víctima son:

- a) **Ausencia de incredibilidad subjetiva.** Se trata de comprobar la existencia de motivos espurios (animadversión, enemistad, venganza...) que hagan dudar de la veracidad de la declaración de la víctima, pudiendo ser objeto de prueba en el acto de la vista por parte de la defensa.

Ahora bien, en los actos de violencia de género deberá tenerse presente la doctrina recogida en la sentencia del TS de 17 de junio de 2000, entre otras, por la que se dispone que «*no es razonable exigir a la víctima de cualquier agresión la solidaridad o indiferencia respecto a la persona causante del perjuicio, por lo que el presupuesto ha de actuar respecto de hechos, relaciones o situaciones diferentes de los concretos hechos a enjuiciar*»(sic).

Tampoco deberá cuestionarse la credibilidad de la *denunciante* por haber entablado una demanda civil, ante el Juzgado de Familia o de Violencia sobre la Mujer, contra su presunto agresor. Así se desprende de diversos estudios estadísticos, en materia de homicidios o asesinatos, (elaborados por el Grupo de Expertos en Violencia de Género del CGPJ) en los que se evidencia que justamente esta circunstancia viene a incrementar el riesgo de comisión de los delitos de

violencia de género.

Por ello, la existencia de situaciones anteriores que propicien malas relaciones entre dos personas no excluirá *per se* la posibilidad de actos de violencia de género, o dicho de otro modo, no significará que la afirmación de haber sido agredida tenga necesariamente que ser falsa.

b) *Persistencia en la incriminación.* Ésta deberá ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones, en lo fundamental. Conforme a la interpretación del Auto del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2004 (ATS 10642/2004) son tres los requisitos que conforman esta exigencia:

- Ausencia de modificaciones o contradicciones en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima.
- Concreción en la declaración, sin ambigüedades, generalidades o vaguedades.
- Coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes.

A partir de lo dicho, y ante la probabilidad de que la testigo-víctima incurra en contradicciones consigo misma e incluso con otros testigos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Cuarta, de 6 de julio de 2004, afirma, entre otros pronunciamientos, que *«nada tiene de extraño que el testimonio de la víctima se muestre cambiante, confuso, inseguro en los detalles. Ése es precisamente un comportamiento normal en quien sufre un trastorno reactivo de personalidad vinculado al maltrato continuado. Lo verdaderamente sospechoso habría sido que un testigo, en tales condiciones anímicas y con tales precedentes biográficos, hubiese proporcionado desde un principio un testimonio perfectamente articulado y coherente» (sic).*

Por tanto, será preciso que en el complicado contexto de la violencia de

género y atendiendo a la creciente gravedad que se le atribuye a este tipo de delincuencia, se relativice la exigencia de este requisito, siempre que existan otros elementos probatorios que corroboren, con especial fuerza persuasiva o de convicción, la versión inicial de la víctima.

- c) ***Verosimilitud del testimonio.*** La verosimilitud se obtiene a partir de las corroboraciones periféricas objetivas que obran en el proceso, tales como el informe del médico/a forense sobre las posibles lesiones producidas; los informes psicológicos o periciales; la existencia de testigos de los hechos, aunque sean de referencia; y también tendrán valor las manifestaciones de otras personas, sobre hechos o datos concretos que, a pesar de no estar necesariamente relacionados con el hecho delictivo, puedan aportar verosimilitud al testimonio de la víctima.

10.3. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE ALEJAMIENTO

El incumplimiento de una medida cautelar de alejamiento por el agresor podría dar lugar a la imposición de una medida cautelar más restrictiva (ej: prohibición de aproximarse a un municipio o incluso prisión provisional). Y puede ser constitutiva de delito de quebrantamiento de condena.

Las dificultades surgen cuando el incumplimiento es consentido por la propia víctima, que ha decidido "perdonar" al agresor y accede a que se acerque a ella o incluso a reanudar la convivencia. Conforme a los Protocolos policiales existentes y reseñados en el epígrafe 8, las Fuerzas de Seguridad encargadas del seguimiento y vigilancia de las órdenes de protección u otros alejamientos tienen obligación de comunicar a la Autoridad judicial su incumplimiento, aunque sea consentido por la víctima.

Si la causa está aún en fase de instrucción y concurre una negativa de la víctima a declarar, podría ocurrir que, ante la falta de pruebas, el Ministerio Fiscal solicitara el sobreseimiento del proceso que, como es lógico, conlleva el

cese de cualquier medida cautelar antes existente. Sin embargo, podría ocurrir que, ante la posibilidad de otras pruebas, el proceso continuará su tramitación, hasta que pudiera dictarse sentencia y, mientras tanto, que siguiera vigente la medida cautelar. Si está se está incumpliendo por una reanudación de la convivencia, cada vez que las Fuerzas de Seguridad se encontraran con la pareja, tendrían que enviar atestado por quebrantamiento de condena. Y el problema surge con ese nuevo proceso.

Aun más compleja es la situación en que se haya dictado sentencia firme condenatoria por un hecho de violencia de género que, como hemos visto en el epígrafe 6, siempre conlleva pena accesoria de alejamiento y que, durante su vigencia, la pareja decida reanudar la convivencia. En este caso, la situación es aún más complicada, pues ni aunque la propia víctima solicitara el cese de ese alejamiento, tendría ninguna capacidad el órgano sentenciador para dejar sin efecto la pena, puesto que, como es sabido, carece de tal competencia que solo cabría al Consejo de Ministros vía indulto.

A la hora de valorar la influencia que ha tenido la conducta de la víctima en la comisión de ese delito de quebrantamiento de condena, la jurisprudencia se ha mostrado cambiante. Así, se ha evolucionado de:

- Una primera línea jurisprudencia, con sentencias como la del Tribunal Supremo 1156/2005, de 26 de septiembre, en la que se absuelve del delito de quebrantamiento con este argumento: *"parece decisión más prudente, compatibilizando la naturaleza pública de la medida dando seguridad jurídica a la persona, en cuya protección se expide, y al mismo tiempo, el respeto al marco inviolable de su decisión libremente autodeterminada, estimar que, en todo caso, la reanudación de la convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento, por lo que ésta debe desaparecer y queda extinguida, sin perjuicio de que ante una nueva secuencia de violencia se pueda solicitar y obtener -en su caso- otra medida de alejamiento"*.

- Una segunda línea, con *sentencias del Tribunal Supremo como la 1079/2007, de 3 de noviembre y la 10/2007 de 19 de enero o la Sentencia del Tribunal Supremo 755/2009, de 13 de julio*, en las que se entiende, al ser el delito de quebrantamiento de condena contra la Administración de Justicia (y tener por bien jurídico protegido a la autoridad) y depender únicamente de desobedecer una resolución judicial a sabiendas de su vigencia, que el consentimiento de la mujer es irrelevante. Incluso, en varias de ellas se hace alusión a que ese consentimiento se presta en un marco intimidatorio innegable o movido por el recurso a falsos sentimientos o promesas ficticias.

11. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

"La violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz".

(Kofi Annan, ex Secretario General de Naciones Unidas).

Para poner en práctica...



¿Sabes si en tu Comunidad Autónoma existe una ley específica en materia de violencia de género?



¿Qué materias pueden regular las leyes autonómicas y cuál la estatal?

Varias Comunidades Autónomas cuentan con una legislación propia sobre violencia de género, dictada en el ámbito de sus competencias. Ello implica que las materias de competencia exclusiva estatal (ej: la legislación laboral, la organización judicial o el Código Penal) son reguladas por la LOMPIVG, pero que otras materias (especialmente los recursos concretos destinados a la atención de las víctimas) son compartidas o competencia autonómica y, por tanto, reguladas en su legislación propia.

Cabe destacar que no todas ellas responden exactamente al mismo concepto de violencia de género ni a la misma estructura, excediendo de la posibilidad de esta Unidad realizar un análisis pormenorizado de todas ellas. Sin embargo, procedemos a su relación y enlace:

- ***Ley 5/01, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas de la Región de***

Castilla- La Mancha. Modificada por Ley12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.

Texto original del BOE en:

<http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A22038-22041.pdf>

Y ley que modifica en:

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2708.pdf>

- ***Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, de Adopción de Medidas integrales contra la violencia sexista del Parlamento de Navarra, modificada por Ley 12/2003, de 7 de marzo.***

<http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/20/pdfs/A30831-30834.pdf>

Y la modificación en:

<http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/25/pdfs/A16062-16064.pdf>

- ***Ley 16/03, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de Canarias.***

<http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/08/pdfs/A26392-26402.pdf>

- ***Ley 9/03, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, de Valencia (con un capítulo dedicado a violencia).***

<http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/08/pdfs/A17427-17433.pdf>

- ***Ley 1/2004, de 1 de abril, Ley Integral de Prevención de la violencia contra las Mujeres y protección de sus víctimas, de Cantabria.***

<http://www.boe.es/boe/dias/2004/04/26/pdfs/A16548-16553.pdf>

- ***Ley 4/05, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres en Euskadi (con algún contenido sobre violencia).***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/14/pdfs/BOE-A-2011-17779.pdf>

- ***Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.***
<http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/02/pdfs/A08515-08526.pdf>
- ***Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer en Baleares (alguna mención a VG).***
<http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/17/pdfs/A35830-35838.pdf>
- ***Ley 4/07, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las mujeres víctimas de violencia de género en Aragón.***
<http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/13/pdfs/A25632-25640.pdf>
- ***Ley 7/07, de 4 de abril, de la Comunidad autónoma de Murcia de Igualdad efectiva contra las mujeres y de protección contra la violencia de género, modificada por Ley 3/2008, de 3 de julio, de modificación de la anterior.***
<http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/22/pdfs/A31919-31930.pdf>
Y modificación en:
<http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/05/pdfs/BOE-A-2011-2211.pdf>
- ***Ley 11/07, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.***
<http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf>
- ***Ley 13/07, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.***
<http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07773-07785.pdf>
- ***Ley 5/08, de 16 de abril de 2008, catalana del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.***
<http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25174-25194.pdf>

- ***Ley 13/10, de 29 de diciembre contra la violencia de género en Castilla y León.***

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20072.pdf>

- ***Ley 3/11, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en la Rioja.***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/18/pdfs/BOE-A-2011-4951.pdf>

- ***Ley 2/11, de 11 de marzo, para la igualdad entre mujeres y hombres y erradicación de la violencia de género en Asturias.***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/04/pdfs/BOE-A-2011-7887.pdf>

- ***Ley 8/11, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6651.pdf>

- ***LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana.***

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14978



Para consultar

Investigación muy interesante denominada "Análisis de la legislación autonómica en materia de violencia de género", de Rafael Cabrera Mercado y M^a José Carazo Liébana, profesores respectivamente de Derecho Procesal y Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, publicado en la colección en el número 5 de Documentos contra la violencia de género, por el antiguo Ministerio de Igualdad, 2010:

Este estudio fue concluido en 2008, por lo que abarca el estado de la legislación

autonómica a ese momento.

Fuente: [Instituto de la Mujer](#)

Las cifras hablan...

%

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha considerado imprescindible realizar una nueva macroencuesta para poder efectuar un nuevo acercamiento a la dimensión de este grave problema social. La **Macroencuesta de Violencia de Género 2011** se ha realizado en esta ocasión en base a convenio con el Centro de Investigaciones Sociológicas. El porcentaje de mujeres que señaló en la Macroencuesta de 2011 haber sufrido violencia de género alguna vez en la vida ha sido del **10,9%** del total de entrevistadas. De ellas, estarían en la actualidad en situación de maltrato casi **600.000 mujeres** (el **3,0%** del total de entrevistadas) y habrían salido de esa situación más de un **1.560.000** (el **7,9%** del total de encuestadas).

%

El total de denuncias presentadas en toda España en 2011 ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer fue de 134.002. El 64% de las denunciantes eran españolas y el 36% extranjeras. Hubo un 11,54% de renunciaciones al proceso. De estas, el 59% fue por parte de mujeres españolas y el 41% de extranjeras.

%

De los 191.124 procesos penales registrados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el 30,28% lo fueron como diligencias urgentes, el 0,16% como sumarios, el 46,29% como diligencias previas, el 17,88% como procedimientos abreviados, el 5,36% como juicios de faltas y el 0,03% de procedimientos por jurado. En 2011, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se ha condenado al 75,4% de las personas enjuiciadas.

%

En 2011, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han ingresado 19.575 asuntos civiles.

%

En 2011, se han solicitado en España ante Juzgados de Violencia sobre la Mujer 35.816 órdenes de protección, de las que han sido acordadas el 66% por ciento y no

acordadas el 34%. Y se han solicitado otras 6.325 ante Juzgados de Guardia, de las que han sido acordadas el 77%. En total, entre órdenes y otras medidas cautelares, se han dictado 73.930 medidas (el 83,4% de ellas consistentes en prohibición de aproximación, sólo un 4,7% privación de libertad) y 18.726 medidas civiles (sólo en un 3,4% ha habido suspensión de visitas).

Fuente: [Poder Judicial](#)

%

A 29 de febrero de 2012, había 787 dispositivos electrónicos en España de seguimiento de la violencia de género. Al finalizar febrero de 2012 se contabilizan 40.241 mujeres que han sido usuarias, en algún momento, del servicio telefónico de atención y protección móvil para víctimas de violencia de género, desde su puesta en funcionamiento en 2005; de ellas, 30.423 habían causado baja a finales de este mes y 9.818 se encontraban en alta como usuarias del servicio. A lo largo del mes de febrero de 2012 se han producido 508 nuevas altas y 628 bajas, habiéndose reducido la cifra de usuarias en 120 en relación a la cifra de usuarias en alta al finalizar enero de 2012.

Fuentes:

[Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad](#)

[Poder Judicial](#)

Cierre con perspectiva...

Con el permiso del humorista gráfico Forges:

